



REVISTA  
HISTORIA  
Y JUSTICIA

**Revista Historia y Justicia**

12 | 2019  
Varia

---

## Los “padres del vecindario”. Sistema policial y delitos sexuales en la ciudad de México (1824-1880)

*The “Neighborhood Parents”. Police System and Sexual Crimes in Mexico City (1824-1880)*

*Les « pères du voisinage ». Système politique et délits sexuels dans la ville de Mexico (1824-1880)*

**Alejandra Palafox Menegazzi**

---



### Edición electrónica

URL: <http://journals.openedition.org/rhj/1819>

DOI: 10.4000/rhj.1819

ISSN: 0719-4153

### Editor

ACTO Editores Ltda

### Referencia electrónica

Alejandra Palafox Menegazzi, « Los “padres del vecindario”. Sistema policial y delitos sexuales en la ciudad de México (1824-1880) », *Revista Historia y Justicia* [En línea], 12 | 2019, Publicado el 29 mayo 2019, consultado el 05 julio 2019. URL : <http://journals.openedition.org/rhj/1819> ; DOI : 10.4000/rhj.1819

---

Este documento fue generado automáticamente el 5 julio 2019.

Revista Historia y Justicia

---

# Los “padres del vecindario”. Sistema policial y delitos sexuales en la ciudad de México (1824-1880)

*The “Neighborhood Parents”. Police System and Sexual Crimes in Mexico City (1824-1880)*

*Les « pères du voisinage ». Système politique et délits sexuels dans la ville de Mexico (1824-1880)*

**Alejandra Palafox Menegazzi**

---

## NOTA DEL EDITOR

Recibido: 21 de enero de 2019 / Aceptado: 05 de mayo de 2019

## Introducción

- 1 El proceso mexicano de modernización estatal, iniciado en las postrimerías coloniales y continuado en el marco liberal post-independiente, se tradujo –en lo que a la regulación penal de los comportamientos sexuales de la población se refiere– en un incremento de las competencias civiles frente a las eclesiásticas, una distinción cada vez más nítida entre los conceptos de delito y pecado (relegando este último al ámbito de lo privado), una supresión paulatina y parcial de ciertos privilegios forales y una sistematización legal, materializada en el Código Penal de 1871, que sancionó el monopolio estatal del derecho y puso fin al pluralismo normativo que acompañó este proceso durante los primeros 50 años de vida independiente del país<sup>1</sup>. La anterior multiplicidad de preceptos legales significó el funcionamiento de una sexualidad prescriptiva fragmentada, lo que, junto con la caída en desuso de algunas medidas –como la severidad de ciertos castigos recogidos en las leyes coloniales– se tradujo en una indefinición legal que, para el funcionamiento del

sistema de justicia, fue suplida por el empleo de diccionarios y obras didácticas de derecho<sup>2</sup>, así como por un amplio arbitrio judicial<sup>3</sup>.

- 2 Este proceso modernizador, por otro lado, conllevó en la ciudad de México esfuerzos institucionales dirigidos a la formación de cuerpos de vigilancia, prevención y represión de las conductas sexuales consideradas delictivas e inmorales, tomando como referente un modelo de policía acorde con los principios liberales que se estaban implementando<sup>4</sup>. Las reformas aludidas se desarrollaron en una ciudad que, en función del momento político, estuvo administrada por instituciones varias, -tales como el ayuntamiento, el gobierno del Distrito o el departamento de México-, en un marco de continuos enfrentamientos entre federalistas y centralistas, en el que se sucedieron continuas disputas entre gobierno y ayuntamiento por el control de la seguridad y el orden vecinal de la capital<sup>5</sup>.
- 3 Cabe recordar que el concepto de “policía” tuvo varias acepciones en el marco espacio-temporal considerado, transitando entre los significados de cuerpo responsable del “arreglo, gobierno y buen orden de una ciudad o república” al de “arte o ciencia de procurar a todos los habitantes de un pueblo una vida cómoda y tranquila”<sup>6</sup>. Fue en las postrimerías coloniales, en el contexto de la invasión napoleónica de la Península Ibérica, cuando en la Monarquía Hispánica se comenzó a adoptar la acepción francesa de cuerpo encargado del orden, la vigilancia y la seguridad pública<sup>7</sup>, consolidándose su valor como organismo dedicado a la persecución, la aprehensión y el mantenimiento en lugar seguro de los delincuentes, desde mediados del siglo XIX<sup>8</sup>.
- 4 El afán por incrementar el control estatal y municipal sobre la administración de la ciudad de México y garantizar en ella la “seguridad pública”, entendida como la protección de los intereses, las propiedades y las vidas de los habitantes del país<sup>9</sup>, unido a la inestabilidad<sup>10</sup>, a los enfrentamientos políticos aludidos y a la ineficacia de las autoridades en la prevención de faltas y delitos en la capital, motivó, a lo largo del periodo estudiado, la promulgación de cuantiosos decretos, bandos y reglamentos municipales<sup>11</sup>, en un afán por burocratizar y modernizar un sistema policial que, sin embargo, estuvo integrado tanto por funcionarios civiles como por vecinos de la ciudad<sup>12</sup>, manteniéndose a caballo entre lo público y lo privado<sup>13</sup>.
- 5 El presente artículo persigue conocer el modo en el que la policía capitalina llevaba a cabo las averiguaciones y detenciones pertinentes tras advertir una posible infracción sexual, en un periodo comprendido entre 1824 y 1880, abarcando, así, un marco temporal extenso, que transcurre desde los primeros años de la independencia del país y hasta poco después de su primera codificación penal. Al respecto, analizaremos algunos de los elementos característicos de estos cuerpos de vigilancia, tales como: quiénes se integraban en los mismos, cuál era su formación, qué relación podían tener con los sujetos implicados en la supuesta comisión delictiva; qué valor ameritaba su palabra en un juicio o dónde residían los límites de su poder. El análisis se llevará a cabo considerando como hipótesis de partida que tanto la normativa formal como los referentes teóricos imperantes no se tradujeron siempre en una efectiva implementación práctica.
- 6 Por ello, y con objeto de reconstruir los perfiles de quienes ejecutaron las detenciones registradas, trabajaremos con un conjunto de fuentes compuesto por documentos normativos de carácter local y estatal -bandos, reglamentos, decretos y leyes varias- y las sumarias recogidas en setecientos setenta y dos expedientes judiciales<sup>14</sup>, incoados por

actos sexuales, cometidos por mujeres o sobre mujeres y tipificados como: delitos de estupro por seducción, violación, adulterio, amancebamiento, incontinencia adulterina, incesto, estupro inmaturo, lenocinio, prostitución, violación incestuosa, fornicación y bigamia<sup>15</sup>. Si atendemos a los datos por el gobernador de la ciudad de México José Gómez de la Cortina para 1836 -siempre con la precaución que un análisis cuantitativo de esta índole implica en una época pre-estadística como la contemplada- podemos afirmar que, sin bien estas categorías delictivas no fueron predominantes entre los ilícitos capitalinos<sup>16</sup>, su análisis cualitativo nos permite acercarnos a las actitudes que hombres y mujeres de distinta estracción socio-cultural mantuvieron frente a la normativa sexual y de género imperante, reconstruyendo esta normativa mediante el estudio de su vulneración.

- 7 En los documentos judiciales contemplados figuran, al respecto, partes informativos -que fueron redactados y remitidos a los juzgados capitalinos por las autoridades policiales y que precedieron la incoación de los procesos criminales contemplados- en los que quedaron narrados, de forma sucinta, los acontecimientos y las circunstancias que habían motivado las denuncias o las detenciones contempladas, dejando registro, además, del nombre, cargo y emplazamiento del emisor, así como de los de los detenidos y quejosos implicados en el acto delictivo. Su análisis -desde una perspectiva de género que adopta premisas de la criminología crítica y, en concreto, de la corriente criminológica del interaccionismo simbólico impulsada por Alessandro Baratta<sup>17</sup>- nos permitirá acercarnos a la praxis cotidiana de alcaldes, inspectores, cabos, guardias y agentes<sup>18</sup>, quienes, dentro y fuera del ejercicio de sus funciones, coadyuvaban a mantener y consolidar un sistema sexual desigual en términos de género y étnico-sociales.

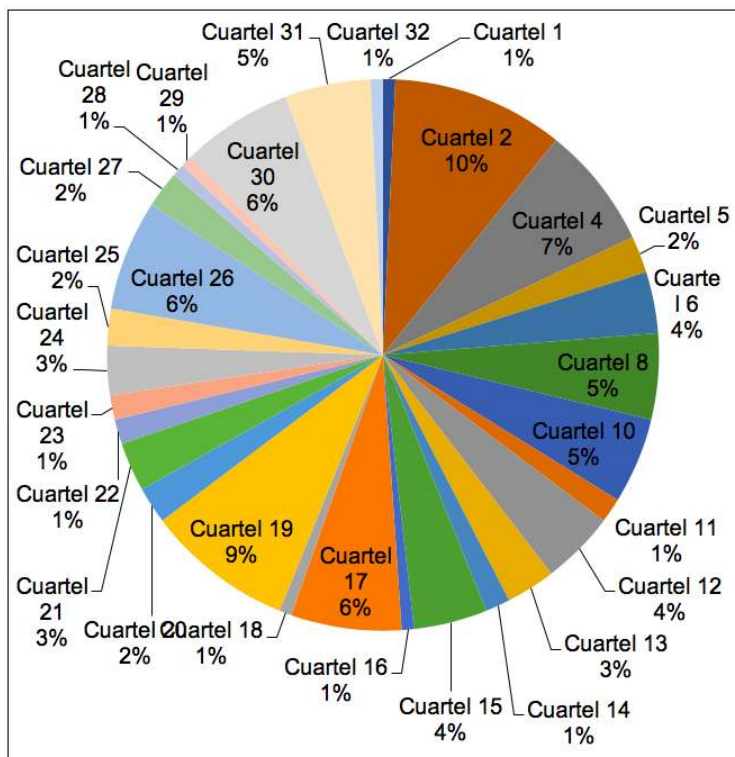
## 1. Continuidades durante la Independencia: los alcaldes auxiliares

- 8 Durante al menos la primera mitad de la centuria, la ciudad de México mantuvo una división administrativa de origen colonial, compuesta por treinta y dos cuarteles menores, integrados en ocho cuarteles mayores, gobernados, cada uno, por un alcalde de barrio. Este cargo -de carácter honorario- fue ocupado por vecinos de estimada reputación, encargados del orden y la tranquilidad de las calles y, por ello, de detener y entregar a las autoridades competentes a quienes cometieran o fueran sospechosos de cometer infracciones<sup>19</sup>. Tras la independencia, en la práctica, las funciones de los alcaldes de barrio fueron adoptadas por los llamados alcaldes auxiliares, personas de "conocida probidad, honradez y buen nombre", que no contaban con formación específica y cuyo nombramiento dependía de los regidores de los respectivos cuarteles menores<sup>20</sup>. Cada auxiliar debía nombrar un equipo de seis ayudantes, compuesto por vecinos de honradez notoria, cuyo cargo -también honorario e irrenunciable- era el de formar rondas de vigilancia y sustituir al alcalde cuando fuera necesario. Todos los cuerpos de guardia existentes, por otro lado, en caso de ser requeridos por los auxiliares, debían prestarles su ayuda, incluyendo el cuerpo de guarda-serenos, llamados también guarda-faroles, por ser los encargados de mantener el alumbrado y la seguridad de las calles en la noche, estando autorizados a "aprehender a los ladrones, ebrios y a todos los malhechores que encontrasen, depositándolos en el vivac más inmediato o en la Cárcel de la Diputación"<sup>21</sup>.
- 9 Los encargados de llevar a cabo las tareas de vigilancia y mantenimiento del orden sexual -legal y moral- en la capital, por tanto, fueron vecinos que trataron de compatibilizar

estas actividades con sus labores y oficios cotidianos, compuestos, normalmente, por actividades modestas, de índole artesanal o agraria<sup>22</sup>. Junto con estos cargos, sin embargo, pronto comenzaron a constituirse otros organismos policiales, remunerados y dependientes, según el periodo político, de los poderes municipales o del gobierno central. De esta manera, y con objeto de controlar y profesionalizar las tareas de vigilancia y seguridad de la ciudad, desde los primeros años de vida independiente del país surgieron diversas figuras que<sup>23</sup>, paulatinamente, fueron restando poder a los alcaldes auxiliares, quienes, en las tareas de firmar partes policiales y entregar a los detenidos a las autoridades judiciales, fueron sustituidos desde finales de la década de los años '40 del siglo XIX por cabos, comisarios, inspectores y subinspectores de policía<sup>24</sup>.

- 10 En las décadas anteriores, sin embargo, los alcaldes auxiliares ejercieron un papel activo fundamental en el control de los comportamientos sexuales de sus vecinos, vigilando sus movimientos y los encuentros que se daban en sus respectivos barrios. Al constar el número de cuartel en los expedientes que incluían los procesos de detención e incoación de diligencias llevados a cabo por los alcaldes, hemos podido establecer, mediante un análisis comparado, las zonas más representadas entre 1827 y 1846, marco temporal en el que los alcaldes auxiliares tuvieron una mayor presencia en la prevención y represión de las sexualidades reprobadas.

Gráfico 1. Relación de partes policiales en función de los cuarteles administrativos de la ciudad de México (1827-1846)



Fuente: Gráfico elaborado por la autora, a partir de la información ofrecida por 139 procesos judiciales disponibles en Fondo TSJDF del AGNM, cajas 25-238.

- 11 Como puede observarse en el gráfico, sólo tres de los treinta y dos cuarteles menores de la ciudad (los cuarteles 3, 7 y 9) no aparecen representados, es decir, no hallamos ningún parte policial o información sumaria que indicaran que los detenidos fueron remitidos a

las autoridades judiciales desde estos territorios. Por otro lado, los cuarteles número 1, 16, 18, 28 29 y 32 tuvieron una escasa presencia frente a los demás, situación que no respondió a criterios socioeconómicos pues, como figura en los trabajos de la historiadora Sonia Pérez Toledo, los predios con mayor valor de la capital se encontraban en el centro de la misma, dividido en los cuarteles 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 y 14<sup>25</sup>. Las áreas en las que más delitos sexuales quedaron registrados, sin embargo, fueron las situadas en el centro norte<sup>26</sup> y sureste<sup>27</sup> de la ciudad, integradas, respectivamente, por los cuarteles menores 2, 4, 17 y 19, pertenecientes, a su vez, a los cuarteles mayores 1 y 5.

- 12 Esta distribución, pese a no permitir afirmar que los delitos sexuales tuvieron una mayor presencia en las zonas más representadas -pues debemos considerar que si bien nuestra muestra documental fue obtenida tras la completa revisión del fondo de archivo indicado, gran parte de la documentación judicial y policial de la época no se conservó-, nos indica que los procesos judiciales analizados comprendieron un marco espacial que abarcó la práctica totalidad de la capital mexicana<sup>28</sup>.
- 13 Hasta su paulatina supeditación a la prefectura de la capital durante el marco político centralista, los alcaldes auxiliares, en palabras del historiador José Antonio Serrano Ortega, representaron "la autoridad inmediata responsable de la seguridad pública de su barrio"<sup>29</sup>. Sus competencias eran las de detener infraganti a quienes cometieran infracciones o fueran sospechosos de haberlo hecho y, si bien las labores de detención también fueron llevadas a cabo por otros cuerpos de seguridad que se fueron creando en la ciudad, como se advierte en los expedientes judiciales analizados, los apresados fueron siempre conducidos, en primer lugar, al domicilio del auxiliar. Éste era el encargado de resolver el posible litigio, cuando se trataba de una falta o delito menor, o de remitir a los supuestos implicados a la autoridad competente en un máximo de ocho horas, ante delitos de mayor gravedad, como los que hemos analizado en este artículo, situaciones frente a las que los auxiliares debían redactar un parte informativo en el que detallaran lo sucedido o, bien, acudir ante la autoridad judicial para dar fe de ello de manera oral<sup>30</sup>.
- 14 Al residir en su entorno de trabajo y ser los máximos encargados de garantizar el orden y el buen comportamiento de sus vecinos, los alcaldes auxiliares solían conocer los enredos, las peleas y los conflictos que se sucedían a su alrededor lo que, en la práctica, provocaba que estos agentes se inmiscuyeran con frecuencia en discusiones íntimas o familiares, deteniendo y apercibiendo a quienes mantuvieran o permitieran el establecimiento de relaciones sexuales y amorosas fuera del legítimo marco matrimonial aunque, teóricamente, "sin introducirse en las casas, ni perturbar de modo alguno el orden doméstico", como quedaba recogido en su reglamento<sup>31</sup>. Así, entre las labores habituales de estos agentes figuraron las de buscar esposas adúlteras<sup>32</sup> e hijas que mantuvieran relaciones sexuales con algún amante<sup>33</sup>, espiar casas donde residieran mujeres solteras<sup>34</sup>, para comprobar si éstas ejercían en ellas la prostitución o alguna actividad considerada indecente<sup>35</sup>, así como custodiar que la indumentaria de vecinos y vecinas se correspondiera a lo impuesto por el orden de género imperante<sup>36</sup> o, al menos, que éstos no anduvieran desnudos por la ciudad<sup>37</sup>.
- 15 Con objeto de garantizar este control, el auxiliar encargaba a sus subalternos que llevaran a cabo rondas o paseos de vigilancia, durante el transcurso de los cuales, podían interceptar a posibles infractores sexuales. De esta manera, por ejemplo, fue cómo en 1827 los agentes José Esteban Escoto y Miguel Espericueta, mientras se dirigían a los alrededores de la universidad para echar del lugar a cigarreras ambulantes y confiscarles su mercancía por orden del auxiliar Manuel Yoldi, advirtieron que un varón que llevaba

un puñal se encontraba discutiendo con una mujer<sup>38</sup>. El desorden causado por la pareja fue motivo suficiente para que ambos fueran conducidos ante el citado auxiliar, quien tras interrogarles y conocer que los detenidos mantenían una relación ilícita de amancebamiento<sup>39</sup>, decidió ponerlos a disposición judicial, enviando a ambos a la Cárcel de la Diputación.

- 16 El apoyo de la atenta y vigilante comunidad de vecinos, por otro lado, fue un elemento crucial en la detección policial de comportamientos sexuales reprobados y su labor de garantizar la moralidad pública, evitando posibles escándalos que atentaran contra la noción de pudor imperante, como la "vergonzosa desnudez", actitud sancionada en la normativa colonial vigente en México a mediados del siglo XIX<sup>40</sup>. Así, hastiado de soportar que un hombre enseñara frente a su casa las "partes ocultas de la generación" a "su familia y criadas", el Ministro de la Suprema Corte de Justicia, Manuel De la Peña y Peña, no dudó tratar de resolver el problema acudiendo al alcalde auxiliar de su cuartel, quien envió a dos de sus ayudantes al lugar de los hechos para detener al sospechoso infraganti<sup>41</sup>. En su declaración ante el juez, frente a quien no compareció la parte acusadora, ambos guardias declararon haber hallado al infractor con las "partes pudendas al descubierto", lo que -pese a contradecir lo afirmado por el acusado, quien sostuvo que había enseñado dichas partes por descuido, al tratar de "exonerar el cuerpo" y hallarse "imposibilitado de la mano derecha"- fue suficiente para ameritar la credibilidad del juez, quien apercibió formalmente al detenido<sup>42</sup>.
- 17 La inclusión, en los partes policiales remitidos a las autoridades judiciales, de ciertas impresiones y opiniones de los auxiliares, por otro lado, nos ha permitido acercarnos a sus relaciones con los hombres y mujeres de los sectores populares de la ciudad de México, pudiendo advertir, en los microcosmos descritos, tanto la mentalidad como la función de estos, teóricamente, honrados guardianes del orden, a caballo entre las siempre volubles esferas de lo público y lo privado, como se advierte en el siguiente ejemplo. Llamado por Margarito Barrios, en abril de 1827 el auxiliar del cuartel número veintidós, Joaquín Mariana, acudió a casa de este vecino para mediar y resolver el conflicto que se había producido entre el denunciante y una mujer que, supuestamente, se negaba a devolverle diversos objetos sustraídos<sup>43</sup>. Al llegar al domicilio indicado y encontrar a Gertrudis Padilla, la mujer señalada por Margarito, Joaquín decidió conducirla a su propia casa, con objeto de llevar a cabo el interrogatorio lejos de la mirada del demandante y poder redactar ahí un informe sobre lo acaecido. Al preguntar a la acusada sobre la relación que tenía con Margarito, ésta narró cómo, a pesar de ser una mujer casada, hacía más de catorce años que mantenía relaciones ilícitas con el denunciante, pues: "éste se la había quitado a su marido y se la había llevado por distintas tierras, y que ahora él mismo le había dicho que ya no quería estar con ella, porque ya tenía otra muchacha por Santa María con quien se iba a casar, por lo que quería le diera su ropa y que ella no se metiera con él" <sup>44</sup>.
- 18 La declaración de Gertrudis sirvió al auxiliar para conocer que ésta había acudido a la casa de la supuesta nueva amante de Margarito con objeto de advertirla del peligro que corría pues, según afirmó ante la autoridad policial, era hombre que solía agredir físicamente a las mujeres con las que cohabitaba, habiendo forzado sexualmente, además, a varias de éstas<sup>45</sup>. Este fue, al menos, el relato que con "espanto", el auxiliar incluyó en el informe remitido al juez, documento que, más allá de la veracidad de los hechos narrados, nos ha permitido comprobar en qué circunstancias se producían las primeras declaraciones de los supuestos implicados -ya fueran víctimas, demandantes, demandados o agresores- en



escándalos o delitos sexuales. Lejos de la mirada de ayudantes u otros testigos, estos relatos quedaron recogidos en el espacio privado que representaba el domicilio de los respectivos alcaldes quienes, como figuraba en su reglamento, debían fungir como “verdaderos padres del vecindario de su respectivo territorio”<sup>46</sup>.

## 1.1 Redes familiares

- 19 Al tratarse de cargos honoríficos, elegidos con base en la honrada conducta de quienes los ostentaban, el personalismo fue un elemento determinante en la elección que los auxiliares hacían de subalternos y ayudantes. Ante esta situación, no era de extrañar que, en aras de incrementar el control ejercido sobre el barrio y por la confianza que podían suscitarle, éstos fuesen elegidos entre miembros de su propia familia, como quedó de manifiesto en el cuartel número veintiséis, división administrativa a cargo de la familia Elizalde durante la década de los años treinta<sup>47</sup>. El predominio de una supuesta condición “honrada” sobre la formación o las aptitudes de estos vigilantes, unida a la indeterminación de los conceptos de “orden” y “seguridad” en los bandos y decretos vigentes, supuso el ejercicio de un amplio arbitrio a la hora de llevar a cabo interrogatorios y detenciones, como quedó de manifiesto en el siguiente proceso por “incontinencia”<sup>48</sup>, incoado en 1831 a petición del auxiliar Ramón Elizalde<sup>49</sup>.
- 20 En atención al parte informativo y en las declaraciones policiales realizadas ante el juez Ybarra, la tarde del 8 de agosto de ese mismo año, el ayudante Eusebio Elizalde y el comisario Mario Flores se encontraban paseando por el Puente de Vacas cuando vieron al zapatero Félix Durán junto con la viuda Micaela López, ambos de treinta años, sentados a orillas de la acequia<sup>50</sup>. Siguiendo las órdenes del auxiliar Ramón Elizalde, padre de Eusebio, de interrogar y detener a cualquier sospechoso que encontraran por la zona, al comprobar que la pareja no estaba casada e intuyendo que podían hallarse en el lugar para tener relaciones carnales, los agentes reprobaron este supuesto comportamiento, instigando a Félix para que contrajese matrimonio con Micaela. Tras lograr que Félix aceptara casarse con su acompañante, y sin preguntar siquiera a ésta por su parecer, condujeron a Micaela a casa del comisario Flores, para que su esposa la custodiara mientras Félix era llevado a una tocinería con objeto de entregar a un fiador que garantizara el cumplimiento de su promesa de matrimonio.
- 21 En el camino, como concordaron todos los interrogados, Félix solicitó acudir a casa de Flores para recuperar un pequeño paño que portaba Micaela, pero, una vez ahí, ésta le entregó un tranchete, herramienta de zapatería que, por sus características, se consideraba un arma prohibida fuera del espacio de trabajo<sup>51</sup>. Tras advertir la presencia del tranchete, los guardias trataron de arrebatárselo, hiriendo a Félix en el brazo por la resistencia ofrecida. Detenidos y puestos a disposición judicial, Micaela y Félix declararon ante el juez Ybarra, narrando ambos una historia muy diferente a la recogida en el relato policial. Según su testimonio, Micaela se dirigía a hacer un mandado por la calle de las Inditas cuando Félix, a quien no conocía previamente, comenzó a perseguirla en evidente estado de ebriedad, manifestándole su deseo de tener relaciones sexuales con ella<sup>52</sup>. Al no obtener respuesta de parte de Micaela, que seguía caminando por la calle, Félix decidió seguirla e insistir en su propuesta, momento en el que aparecieron los guardas citados, interrogaron a Félix y decidieron conducir a ambos casa de Flores.
- 22 Como reconocieron los cuatro sujetos implicados en el altercado, ante la pregunta de si la pareja estaba dispuesta a contraer matrimonio, Micaela permaneció callada, lo que ante



los ojos del ayudante Elizalde, no tenía relevancia alguna, pues era incomprensible que una mujer que había tenido relaciones carnales con un hombre se negara a casarse con éste cuando se lo proponía. Micaela sostuvo ante el juez que no se había opuesto explícitamente porque la pregunta se había dirigido a su compañero mientras éste, a su vez, afirmó haber aceptado ante los agentes para tratar de ocultarles que su única intención era tener un encuentro carnal con ella<sup>53</sup>.

- 23 El predominio, durante el marco temporal contemplado, de modelos de género binarios y dicotómicos, basados en supuestas diferencias ontológicas entre los sexos, supuso el desarrollo de un modelo de feminidad deontológico articulado en la contención, la subordinación a la autoridad varonil y el recogimiento doméstico, lo que implicó la valoración de las mujeres como seres débiles, inferiores y sexualmente pasivos, receptores de la actividad masculina y destinados a la reproducción<sup>54</sup>. La conceptualización de la honra femenina como un reconocimiento social basado, esencialmente, en su conducta sexual, así como la relevancia de esta cualidad en la adquisición de un capital simbólico necesario para la obtención de recursos materiales<sup>55</sup>, por otro lado, se tradujeron en continuos esfuerzos por deslegitimar a aquellas mujeres cuya actividad sexual sobrepasara los límites de la esfera matrimonial. Esta situación, unida a una conceptualización liberal del varón como ser productivo, proveedor material y protector del núcleo familiar<sup>56</sup>, redujo las posibilidades de que una mujer soltera y de extracción popular adquiriese recursos suficientes para garantizar su mantenimiento y el de sus hijos mediante el desempeño de actividades remuneradas situadas al margen de la prostitución<sup>57</sup>. Esta realidad explicaría que, ante el ofrecimiento de Félix de casarse con Micaela y la falta de respuesta de ésta, los agentes presentes, dando por hecho que ambos individuos se encontraban en una relación de amancebamiento, ni siquiera contemplaran la posibilidad de que Micaela, mujer soltera y pobre, pudiese no estar de acuerdo con contraer matrimonio con el hombre con el que mantenía relaciones.
- 24 A pesar de las incongruencias entre el parte policial y las declaraciones de guardias y acusados, así como la ausencia de testigos, el juez Ybarra dio total credibilidad a la palabra de los agentes, algo frecuente en la mayor parte de los procesos consultados, pues su condición de hombres honrados dotaba a los relatos policiales de mayor probidad y autoridad frente a los de simples individuos de los estratos populares. Ante esta situación, Micaela fue condenada a servir en una casa de honra, por hallarse culpable del delito de incontinencia, y Félix a más de dos meses de prisión por haber ofrecido resistencia ante la autoridad<sup>58</sup>. Como ya hemos comentado, la conceptualización de las mujeres en base a su comportamiento sexual se tradujo en continuos esfuerzos por parte de las autoridades por interceptar, sancionar y reubicar la conducta de aquellas que no acataran los preceptos imperantes. Por el contrario, la asimilación de la actividad sexual masculina como parte integrante de su modelo de género prescriptivo supuso un menor control y una mayor tolerancia frente a manifestaciones carnales situadas al margen de la esfera matrimonial, lo que explicaría que, en el caso revisado, la supuesta "incontinencia" de Micaela fuese la única condenada.

## 2. Honor en el proceso de profesionalización policial

- 25 La paulatina imposición de una economía monetaria y librecambista a lo largo del siglo XIX, principalmente a partir de mediados de la centuria -con el periodo liberal conocido como "Era de Reforma"<sup>59</sup>- no fue óbice para que la sociedad capitalina siguiera

moviéndose con base en un conjunto de valores compartidos, dentro de los cuales el concepto de honor masculino siguió estando relacionado con aspectos no materiales, como los conceptos de rectitud y trabajo.

- 26 Los vaivenes políticos que se sucedieron en el país desde los años cuarenta y el constante "estado de inseguridad", en el que se hallaban las vidas y las propiedades de los habitantes de la capital mexicana ante los ojos de las élites político-intelectuales<sup>60</sup>, se tradujeron en la creación de nuevos cuerpos de vigilancia para la ciudad de México, incluyendo las figuras de jefe de cuartel y jefe de manzana, establecidos por bando municipal en 1846<sup>61</sup>, o el cuerpo de vigilantes de policía, creado en 1848 e integrado por cuatrocientos sesenta y cinco hombres, treinta y dos cabos y tres jefes, nombrados por el gobernador del Distrito<sup>62</sup>. La profesionalización de este nuevo organismo, dada la remuneración de sus agentes, sin embargo, convivió y se siguió apoyando en vivaques vecinales, organizados por alcaldes auxiliares y jefes de cuartel y de manzana para incrementar la seguridad de las calles durante la noche<sup>63</sup>.
- 27 El cargo de jefe de cuartel y de manzana, ambos honoríficos, dependían del gobernador del Distrito, tenían una duración de un año, eran irrefutables y podían recaer, por elección de los ciudadanos de la jurisdicción correspondiente, en un vecino de más de veinticinco años y con residencia fija en dicho territorio. Estos agentes, que en la práctica vinieron a sustituir a los alcaldes auxiliares en el ejercicio de las tareas de control y vigilancia de los cuarteles, siguieron requiriendo de los vecinos para garantizar la seguridad en los barrios, manteniendo en las calles una prolongación del espacio privado más que un espacio público sujeto a las leyes, imbricando así lo moderno formal con la tradición más informal.
- 28 Pese a no obtener remuneración alguna, el nombramiento como jefe o ayudante de cuartel o manzana podía incrementar notablemente el estatus de un trabajador ante sus vecinos y, por lo mismo, su revocación del cargo comportaba una ignominia para quien lo padecía, como se advierte en el proceso por lenocinio que fue instruido en 1850 contra el comerciante almonedero de muebles Teodoro Ruiz<sup>64</sup>. Nombrado ayudante de manzana por el buen comportamiento y la honradez demostrada durante más de diez años en su oficio, Teodoro sustituyó en el cargo al carpintero Mariano Palacio, quien supuestamente había sido removido de éste por los varios excesos y abusos cometidos durante su mandato.
- 29 Al ser vecinos y haber trabajado juntos en diversas ocasiones, Mariano y Teodoro habían tenido encuentros y desavenencias profesionales, lo que hizo sospechar a Mariano que su despido había sido obra de su sustituto por lo que, con objeto de hacer sufrir a éste un desprestigio similar, decidió denunciar la ilícita relación de amancebamiento que Teodoro mantenía con una mujer, de nombre Julia Farías, acusándole, además, de lucrarse económicamente de la prostitución de ésta y otras mujeres, ejercida en su propia casa.
- 30 La denuncia supuso la inmediata detención y revocación de Teodoro de su cargo como ayudante de manzana. Su casa, lugar de trabajo y de residencia, fue clausurada por orden del alcalde, con la anuencia del gobernador del Distrito y, a pesar de que durante el proceso los únicos testigos que pudieron declarar en su contra fueron hombres públicamente enemistados con él, Teodoro fue condenado a cumplir seis meses de servicio en la enfermería de la Cárcel de la Ciudad, centro en el que también Julia, su supuesta cómplice, fue recluida durante el mismo tiempo.

- 31 La revisión del caso en segunda instancia por parte de la Suprema Corte de Justicia puso de manifiesto cómo en el juicio, cargado de irregularidades, la culpabilidad de los acusados no había podido demostrarse. Por ese motivo, la sentencia de primera instancia quedó revocada y la pena impuesta fue compurgada por el tiempo de prisión sufrido, una vez, sin embargo, que la condena ya había sido cumplida en su totalidad.
- 32 Más allá de la materialidad que supuso el encierro de los procesados, como puso de manifiesto el propio Teodoro en su declaración, el proceso significó para él una afrenta pública irrevocable, una mácula en su nombre y en su honor que jamás podrían limpiarse. A diferencia de él, “la desgraciada Farías”, reproduciendo la expresión empleada por Teodoro para referirse a su compañera, “a presencia de su sexo y esfera”, es decir, por ser una mujer soltera<sup>65</sup> y de bajo estrato económico, nada tenía que perder. Teodoro se erigía así como “la única víctima sacrificada a merced de la más inicua confabulación”, todo por el mero hecho de haber tenido relaciones ilícitas “con aquella infeliz mujer”<sup>66</sup>. Como se advierte en este representativo ejemplo, las desiguales relaciones de género que imperaban en la sociedad capitalina a mediados del siglo XIX, así como la centralidad de la sexualidad en las mismas, marcaban distintos criterios a la hora de conformar los conceptos de honor masculino, centrado en el trabajo y la obtención de recursos materiales, y de honradez femenina, construido sobre aspectos meramente sexuales. Debemos recordar, además, que durante el proceso de transición del Antiguo Régimen jurídico a la modernidad –marco en el que se inserta este artículo– el prestigio social frente a la comunidad aun ocupaba un lugar central en la vida de un habitante capitalino<sup>67</sup>. Como ha puesto de manifiesto Vanesa Teitelbaum, la referencia a la vecindad como requisito para la obtención de la ciudadanía sobrepasaba su dimensión espacial y englobaba también la estima y el reconocimiento de la comunidad sobre el individuo<sup>68</sup>.
- 33 A pesar de las continuas denuncias que a lo largo de la centuria se sucedieron sobre la inoperancia y los abusos de poder que militares, policías y guardianes cometían contra los habitantes de sus respectivos cuarteles, el reconocimiento ostentado por estos agentes del orden, de cara a la comunidad y a las autoridades, se tradujo en una alta consideración de su palabra por parte del poder judicial. Al ser considerados hombres honrados por el puesto que ocupaban, sus testimonios fungieron como instrumentos probatorios en más de una ocasión<sup>69</sup>.
- 34 Esta situación se materializó en diversos procesos en los que los acusados por delitos sexuales recibieron una condena judicial con base, exclusivamente, a lo afirmado en las declaraciones policiales<sup>70</sup>, fungiendo éstas como prueba dirimente en los casos en los que los testimonios de otros testigos resultaban contradictorios entre sí. Así lo ejemplifican varios procesos, como el incoado contra Carlos Villanueva por violación, –quien fue condenado con la palabra del alcalde del cuartel número veinte, Mario Centeno, sobre su conocida mala conducta como única evidencia<sup>71</sup>–, o el juicio por incontinencia contra Calixto Díaz y María Alfonso Uribe, –condenados a prisión sólo por el testimonio del auxiliar del cuartel diecisiete, Agustín Fuentes, quien afirmó que había hallado a ambos cohabitando en una misma habitación<sup>72</sup>.

### 3. Personalismo, privilegios y excesos

- 35 Los intentos institucionales por profesionalizar los cuerpos de seguridad de la capital mexicana no fueron suficientes para poner fin a un personalismo que siguió imperando

tanto en los nombramientos como en el ejercicio de los cargos. Ante esta situación, como comprobamos a través de los documentos judiciales revisados, la parcialidad y la desigualdad fueron aspectos constantes en el trabajo de los diversos agentes quienes, ante la sospecha de una comisión delictiva, efectuaban sus investigaciones y persecuciones en función de la condición de los involucrados, considerando si estos eran familiares, personas poderosas, vecinos cercanos o desconocidos<sup>73</sup>.

- 36 Estas circunstancias -estatus de los implicados y relación mantenida con éstos- determinaron que los policías invirtieran más o menos esfuerzo y atención en los procesos de búsqueda, aprehensión y declaración ante las autoridades judiciales, pudiendo incluso olvidar las circunstancias en las que se había producido una detención en los casos en los que la víctima no fuera relevante para ellos, como ocurrió en el proceso incoado contra José de la Luz Montañón en 1865, por haber intentado violar a una mujer indígena y muda en el callejón de la Pulquería de Palacio<sup>74</sup>. Aquí, como quedó recogido en el parte policial, el sospechoso fue detenido por los guardias Francisco Saucedo y Agustín Ruíz, quienes acudieron por los gritos de auxilio dados por una vecina, al ver que un sujeto trataba de forzar a una mujer<sup>75</sup>. En su declaración ante la autoridad judicial, Agustín afirmó cómo ambos guardias habían visto que el acusado "tenía a una mujer muda, la que tenía las enaguas alzadas" y cómo, tras escuchar el relato de la vecina, decidieron detenerlo por tratar de cometer una violación<sup>76</sup>. El guardia Francisco, sin embargo, declaró que no podía recordar nada de lo acontecido, sin que ello le supusiera reprobación alguna de parte de las autoridades, pues la colaboración con la justicia no siempre era un imperativo para estos agentes.
- 37 Los escasos recursos invertidos en la formación de policías, unidos al incremento de estos en aras de una mayor lucha contra la inseguridad, como hemos visto, se materializaron en un mayor número de hombres que, pese a no contar con una preparación suficiente, transitaban por la ciudad de México dotados de armas y de poder para intimidar, interrogar, detener e, incluso, agredir, a quienes estimaran necesario.
- 38 Esta situación, unida a una activa imbricación del ejército en las labores policiales, se tradujo en la comisión de continuas arbitrariedades y de una constante contradicción del modelo de policía liberal que trató de implementarse desde mediados de la centuria, pues, al disfrutar de fuero, la inclusión de los militares negaba la ansiada premisa de igualdad legal<sup>77</sup>. De hecho, la privilegiada situación jurídica que disfrutaron los miembros del ejército, hasta, al menos, la promulgación de la conocida como Ley Juárez de 1855<sup>78</sup>, ante los casos de irregularidades o abusos cometidos durante el ejercicio de su cargo, se tradujo en la posibilidad de ser juzgados por un tribunal marcial y de ser tratados, así, con mayor lenidad que en uno ordinario.
- 39 La vía castrense, sin embargo, no fue óbice para que miembros de los sectores subalternos de la sociedad se atrevieran a enfrentar abusos y excesos cometidos desde esta privilegiada posición. A pesar de las continuas irregularidades cometidas por miembros del ejército y de las ingentes dificultades a la hora de castigar estos posibles excesos, algunas mujeres, como María Álvarez, no dudaron a la hora de acudir a las autoridades para denunciar situaciones consideradas intolerables, como la detención arbitraria que el capitán Joaquín Ayala había hecho de sus dos hijos, a causa de una discusión personal. Interesado en hablar y ver a la hija de María, una joven doncella de dieciséis años llamada Sostenes Hoyos, el capitán Ayala solía frecuentar el domicilio familiar con la excusa de visitar a su hermana, casada con otro de sus hijos.

- 40 Tras la advertencia de María de los intereses sexuales del capitán sobre su hija y su frontal oposición ante una posible relación entre ambos, el oficial se presenció un viernes por la noche, con objeto de obtener el beneplácito familiar por la fuerza, reclamando a voces su voluntad de estar con la joven y tratando de sustraerla del domicilio<sup>79</sup>. Ante la negativa de los hermanos y de la madre, siguiendo el relato de ésta última, el capitán se dirigió a su cuartel y regresó a la casa acompañado de varios subalternos, quienes ayudaron a su superior a agredir física y verbalmente a todos los familiares presentes, deteniendo a dos de los hijos y apaleando a dos mujeres en el camino al cuartel -la hermana de Sostenes y una vecina- por tratar ambas de impedir que se llevaran a los arrestados a la prisión de la ExAcordada<sup>80</sup>, ampliamente conocida por las malas condiciones en las que vivían los presos y por la violencia que sobre ellos se cometía.
- 41 Los detenidos, después de recibir varios golpes, fueron finalmente dejados libres en la calle, lo que no evitó que, ante la evidente situación de abuso cometida, su madre decidiera presenciarse ante las autoridades para denunciar lo ocurrido<sup>81</sup>. Apoyándose en la declaración de tres testigos casuales e, incluso, de tres de los guardias que acompañaron a Ayala en la contienda, María relató las agresiones sufridas por ella, sus hijos y su vecina. Los informes médicos ordenados por el juez confirmaron las lesiones de los denunciados, de gravedad en el caso de la hermana de Sostenes. La ausencia documental de la resolución de este proceso, lamentablemente, nos impide conocer el desenlace del juicio aunque, el hecho de que prácticamente todos los militares procesados por excesos que hemos encontrado en los expedientes judiciales analizados hasta 1855 lograran eximirse de ser sentenciados por la justicia civil, como pude observarse en la siguiente tabla, nos invita a pensar que, en este caso, el capitán Ayala no fue una excepción.

Tabla 1. Presencia de militares según delito (1827-1855)

Año	Acusado	Rango	Delito	Instancia responsable	Resolución
1827	Domingo Noriega	Coronel	Estupro	Supremo Tribunal de Guerra y Marina	Incompleto. Primeras diligencias
1830	Antonio Osorio	Subteniente	Adulterio	Auditor de Guerra José Manuel Zozaya. Suprema Corte Marcial	Incompleto. Primeras diligencias
1832	Félix Navarro	Soldado	Estupro	Segundo Regimiento Permanente de México. Asistencia del juez de letras José María Puchet	Libertad por falta de mérito
1832	Mariano Gallegos	Oficial	Estupro	Comandancia General	Incompleto. Primeras diligencias

1834	Miguel Rodríguez	Soldado	Incesto	Juez de Letras José María Puchet. Suprema Corte de Justicia	Libertad en 1ª instancia. 3 años de presidio en Texas en 2ª instancia.
1838	Manuel Montoro	Coronel	Lenocinio	Juez de Letras José María Tamayo. Se remite a la Comandancia General	Incompleto. Primeras diligencias
1838	Joaquín Ayala	Capitán	Conato de Violación	Juez de Letras José María Casasola. Informa a la Comandancia General	Incompleto. Primeras diligencias
1839	Antonio Moreno	Teniente	Adulterio	Juez de Letras José María Casasola. Informa a la Comandancia General	Libertad por falta de mérito.
1841	Félix Azoñoz	Teniente Coronel	Estupro	Auditor de Guerra José Manuel Zozaya	Incompleto. Primeras diligencias
1842	Bartolo Velázquez	Soldado desertor del Cuerpo de Seguridad Pública	Violación	Juez de Letras José María González de la Vega. Remite el caso al comandante del escuadrón de Húsares	Incompleto primeras diligencias
1843	José Loreto Magaña	Soldado	Estupro	Juez de Letras José María Muñoz de Cote	Pago costas judiciales y dote a la víctima
1844	Pablo Cañedo	Sargento	Adulterio	Auditor de Guerra José Manuel Zozaya	Incompleto primeras diligencias
1844	Vicente Ramírez	Teniente	Rapto y estupro	Comandante General del Departamento	Libertad
1845	José María Pérez	Oficial de seguridad pública	Estupro	Auditor de Guerra José Manuel Zozaya	Incompleto primeras diligencias
1848	José María Llerena	Tambor	Estupro	Juez de Letras José María Bocanegra. Confirmación del Coronel del Batallón de Independencia	Un mes de calabozo

Fuente: Tabla elaborada por la autora, a partir de la información ofrecida por 15 procesos judiciales.  
Fuente: Fondo TSJDF del AGNM.

- 42 La supresión de los privilegios forales en materia delictiva desde 1855, a pesar de constreñir a los militares que abusaran de sus funciones a hacer frente a la justicia criminal ordinaria, no puso fin a los excesos policiales, frecuentes en las décadas siguientes. Esta situación trató de ser paliada mediante medidas como la creación de la figura del subintendente de policía en 1855, cargo encargado explícitamente de vigilar que los agentes hicieran estricto cumplimiento de sus deberes e impedir los abusos de autoridad o de fuerza a los que “naturalmente” propendían, así como de tratar de que obraran “con suma moderación, evitando insultos y malos tratamientos innecesarios”<sup>82</sup>.
- 43 Las “tropelías y atentados”, que se siguieron sucediendo durante las actuaciones policiales en los años siguientes, cobraron un especial protagonismo en el panorama político nacional, tratándose incluso en el marco de la discusión y redacción de la Constitución Política de la República Mexicana de 1857, primera constitución liberal del país<sup>83</sup>. Durante estas sesiones extraordinarias, congresistas como Ponciano Arriaga o Isidoro Olvera<sup>84</sup> reclamaron el establecimiento de medidas legales tendentes a paliar estos abusos, así como “la manera bárbara y salvaje” con la que se efectuaban los arrestos<sup>85</sup>. Como sostuvo el diputado Arriaga, durante las actuaciones policiales de reconvención y aprehensión, “desde los guardias diurnos hasta los gobernadores del Distrito” todos se creían “con derecho para vejar y golpear”<sup>86</sup>. A pesar de la frivolidad y las risas con la que algunos congresistas recibieron sus palabras, sus quejas sirvieron para que en la carta magna de 1857 quedara establecido que “todo maltrato en la aprehensión o en las prisiones” era un abuso que ameritaba castigo de parte de las leyes y autoridades competentes<sup>87</sup>.
- 44 Durante las décadas de los años Sesenta y Setenta, en el seno de los distintos gobiernos y estructuras políticas (República Liberal, Imperio y Porfiriato), siguieron promulgándose medidas tendentes a organizar e incrementar la eficiencia de los cuerpos policiales capitalinos. De esta manera, en 1861, dentro de la nueva división administrativa del Distrito Federal, el mantenimiento del orden y de la seguridad recayeron en la figura del prefecto, cargo nombrado por el gobernador, quien debía garantizar el correcto funcionamiento de las distintas fuerzas del orden -la fuerza armada de infantería y caballería, los resguardos nocturnos y diurnos, los inspectores y subinspectores de acera y las distintas comisiones de seguridad-<sup>88</sup>.
- 45 Pocos años después, con la implantación del II Imperio mexicano en 1863, la policía capitalina quedó integrada en un cuerpo general, a cargo del prefecto, y de otro municipal, comandado por los alcaldes<sup>89</sup>. En orden descendiente, la jerarquía policial de la ciudad de México -dividida en ocho cuarteles mayores de policía, subdivididos en cuarteles menores y estos a su vez, en manzanas o secciones proporcionales<sup>90</sup>- quedó compuesta por un jefe de la policía, un comisario central, cuatro inspectores, ocho comisarios de policía, un sub-comisario por cada cuartel menor y un jefe por cada manzana, estos dos últimos con carácter concejil y honorífico<sup>91</sup>.
- 46 La restauración de una república federal en 1867, tras la caída del Imperio, conllevó la publicación de diversas disposiciones regulatorias de los cuerpos de policía capitalinos, como el *Reglamento de la policía de la Ciudad de México y del Distrito Federal*<sup>92</sup>, promulgado tras la entrada en vigor de los códigos civil y penal del Distrito Federal y en vigor hasta el fin del Porfiriato<sup>93</sup>. En este texto preceptivo quedó explicitada la voluntad política de “limpiar” las calles capitalinas de mendigos y prostitutas que pudieran incomodar a los



transeúntes, así como la de garantizar el cuidado de “la moral pública y las buenas costumbres”, reprimiendo a quienes trataran de ultrajarlas<sup>94</sup>.

- 47 A pesar de estas medidas, la falta de formación, disciplina y uniformidad de los inoperantes cuerpos de vigilancia, los bajos sueldos y la arraigada corrupción y arbitrariedad de sus integrantes<sup>95</sup>, así como los crecientes índices de criminalidad<sup>96</sup>, impulsaron en los años siguientes nuevas actuaciones tendentes a la profesionalización de los agentes de la capital, como la creación en 1878 del Resguardo Municipal<sup>97</sup> o el establecimiento un año más tarde del cuerpo de Gendarmería Municipal, reforma que supuso un aumento significativo de los salarios y que trató de renovar el personal policial, sustituyendo a los antiguos funcionarios por hombres no corrompidos y con mayor formación<sup>98</sup>.
- 48 Pese a todo, la policía capitalina siguió gozando en estos años de práctica inmunidad a la hora de perpetrar abusos en el ejercicio de su cargo. Sus integrantes, conocedores de estos privilegios, siguieron cometiendo agresiones, excesos e irregularidades, utilizando su posición de poder para resolver conflictos personales, también de carácter sexual. Así se recoge en varios de los procesos consultados, como el juicio contra el guarda nocturno Antonio Morales, quien no dudó en acompañar a su amante a la casa de su legítimo esposo para insultarlo y amenazarlo, a pesar de las fuertes condenas recogidas en la normativa contra los cómplices de adulterio, antes y después de la codificación penal<sup>99</sup>, u otros, como el caso que narramos a continuación.
- 49 La falta de iluminación en las calles capitalinas, paliada parcial y paulatinamente durante el último tercio del siglo XIX, motivó el establecimiento de medidas que restringían las actividades de sus habitantes durante la noche, -como el transporte de bultos, penado con cárcel- con objeto de incrementar el control y la prevención delictiva por parte de las autoridades. Para una sirvienta doméstica como Soledad Robles, de 31 años, esta prohibición le suponía tener que concluir antes del atardecer sus actividades laborales externas, como el lavado y la entrega de la ropa de los señores para los que trabajaba<sup>100</sup>. Una tarde de marzo, sin embargo, cuando iba regresando del baño de San José, donde había acudido a lavar la ropa de su “amo”, según expuso ante el juez, Soledad se encontró con una amiga con la que terminó charlando y tomando pulque. Cuando ya se hallaba en estado de ebriedad, apareció su amante, Clemente Alonso, un zapatero casado de 33 años, quien le ayudó a llevar el bulto de ropa que transportaba. Juntos, siguieron tomando y paseando por el centro de la ciudad hasta que fueron sorprendidos por el cabo del Resguardo nocturno, Manuel Fernández quien, acompañado por el guarda-faroles Antonio Rodríguez, los detuvo tras advertirles de la prohibición de transportar bultos en la noche<sup>101</sup>. Según Soledad, mientras Rodríguez se mostraba decidido a encarcelarlos, a pesar de las explicaciones sobre el contenido del bulto que la pareja ofrecía, el cabo Fernández se le acercó y le propuso susurrándole, dejarla en libertad si aceptaba acostarse con él<sup>102</sup>.
- 50 El rechazo de Soledad, siguiendo siempre su testimonio, provocó una violenta reacción en el agente, quien no dudó en marcar su espalda de un cintarazo, dejándole marcas constatadas en la sumaria judicial. Considerando el testimonio de los agentes, sin embargo, el cintarazo fue una reacción ante los improperios pronunciados por Soledad, quien habría reaccionado a las preguntas de los policías sobre el contenido del bulto insultando a ambos y afirmando, literalmente, que portaba “pañales para limpiarse el culo”<sup>103</sup>. Fernández, por su parte, negó haber tratado de abusar sexualmente de Soledad,

argumentando que difícilmente hubiese podido hacer esa propuesta delante de su subalterno.

- 51 Al tratar de huir, ambos acusados recibieron diversos golpes de los agentes, quienes hirieron a Clemente en la frente y en el labio, algo tolerado por las leyes en casos de resistencia ante la autoridad. En el parte suscrito por el responsable del resguardo nocturno, sin embargo, quedó recogido que la causa por la que los sospechosos fueron aprehendidos fue un acto de incontinencia sexual. En atención a lo afirmado por el guarda-faroles Rodríguez, los agentes supusieron que Soledad y Clemente pretendían "fornicar" por hallarse ebrios y parados junto a uno de los montones de arena de la entrada del Callejón de Arenero, área donde las parejas solían tener relaciones carnales, si bien ninguno de los agentes presencié un acto sexual<sup>104</sup>. La acusación de encontrarse fornicando fue negada por ambos acusados, quienes, por otro lado, no tuvieron reparos en reconocer su amancebamiento. Clemente, por su parte, aseguró su supuesta inocencia, declarando que no tenía necesidad de tener sexo en la calle y que su arresto se había producido por el transporte del bulto de ropa durante la noche. Tras pasar algunos días detenidos<sup>105</sup>, ambos procesados fueron puestos en libertad, compurgados por el tiempo de prisión sufrido y apercibidos para que dejaran su ilícita relación.
- 52 Si bien durante el proceso, la pareja denunció los abusos y las agresiones perpetradas por los agentes, ninguno de los dos formalizó sus acusaciones. El juez, por su parte, no reprobó el comportamiento de los policías ni pareció preocuparse por las incongruencias recogidas en las declaraciones de los guardias con respecto al parte policial, en lo referente al delito de fornicación que teóricamente motivó la detención de los acusados. Estas contradicciones eran, en apariencia, parte de las extralimitaciones permitidas a los cuerpos policiales en el ejercicio de sus funciones, motivo por el que ninguna de las partes encontradas durante el juicio, -juez, policías y acusados- optaron por cuestionar el statu quo del sistema de prevención y represión delictiva vigente.

### 3.1 Abusos sexuales

- 53 Además de los excesos que hemos comentado hasta el momento, el fondo de archivo revisado contiene cinco denuncias por delitos de violación, cometidos supuestamente por policías e incoados entre los años 1864 y 1880<sup>106</sup>. De los cinco procesados, sólo uno fue condenado en primera instancia.
- 54 En el primer caso, Don José María Miranda, patrón de la criada de 19 años, Catarina Luna, denunció que ésta había sido víctima de una violación grupal perpetrada por Miguel Ferrete -antiguo amante de la joven y padre de su hijo- junto con Bonifacio Peña, compañero de Miguel en el cuerpo de Policía Rural<sup>107</sup>. Catarina, quien suscribió lo afirmado por el denunciante, detalló que, a pesar de que en el momento de la agresión varios testigos transitaban por la zona, ninguno de los presentes trató de intervenir cuando ambos policías, conscientes de su inmunidad, dieron de cintarazos y abofetearon en la cara a Catarina, quien gritaba y suplicaba ayuda. Venciendo sin dificultad la resistencia ofrecida por la joven, ambos agentes lograron llevarla a un paraje solitario para, tras un breve forcejeo en el que desgarraron sus ropas y sus enaguas, consumir uno a uno su violación. Una de las testigos, al conocer a la víctima, corrió a la casa de Don José María para dar aviso de lo sucedido, llevándole al lugar del crimen. Sólo haciendo uso de su respetabilidad como prefecto, el patrón logró que los agresores dejaran marchar a Catarina<sup>108</sup>.

- 55 El siguiente agente acusado por violación fue Casimiro Hernández, guarda faroles n. 83, quien, supuestamente, agredió sexualmente a la joven doncella de catorce años, Cipriana Calderón, cuando ésta regresaba de noche a su casa desde la Plazuela de las Vizcaínas a donde se había dirigido a tirar unas hilachas<sup>109</sup>. A diferencia del caso anterior, la venganza no fue el móvil del crimen, dado que el agresor no conocía a su víctima. Según lo declarado por las partes implicadas, Cipriana regresaba a su casa cuando Casimiro, creyendo supuestamente que era una prostituta, se abalanzó sobre ella y la violó, amenazándola con matarla si ofrecía resistencia. Acto seguido, y a cambio de seis reales, habría tratado, sin éxito, de comprar su silencio.
- 56 La tercera de las víctimas referidas fue María Jesús Rosalía, una mujer casada de 30 años de edad, quien se encontraba detenida en el calabozo de Guadalupe Hidalgo el 27 de octubre de 1872<sup>110</sup>, después de haber sido aprehendida por encontrarse discutiendo públicamente con otra mujer<sup>111</sup>. Acusada de haber protagonizado una "riña de palabras", según quedó registrado en el relato de la denunciante, ésta fue encerrada por el inspector Margarito Anaya, quien al poco tiempo regresó a la cárcel del pueblo, "abrió la puerta y la cerró por dentro y dirigiéndose a la declarante la forzó, valiéndose de su superioridad física y no obstante la resistencia que hizo (...), desgarrándole en la lucha la camisa"<sup>112</sup>. Tras permanecer en el interior del calabozo alrededor de una hora, Anaya salió y se encontró con el policía Feliciano Rojas, quien declaró ante el juez como testigo, afirmando que al llegar al calabozo se había encerrado en la celda con llave y la luz apagada<sup>113</sup>. Al advertir su presencia, María Jesús le había pedido auxilio, confesándole la agresión sufrida, por lo que reconvino al inspector y condujo a la víctima a su casa, después de que Anaya la hubiese dejado en libertad a cambio de no denunciarle.
- 57 La siguiente agresión sexual denunciada también fue perpetrada, supuestamente, en un calabozo, en concreto en el de la Comisaría de Díaz Barreiro, donde se encontraba la joven de once años, Soledad Francisca Ávila, en calidad de víctima de violación, tras haber sido agredida por un jícara, mientras cuidaba el obrador de pintura de su patrón, Don José Amado Cisneros<sup>114</sup>. Tras sorprender al agresor, Cisneros dio aviso a unos guardias y acompañó a la víctima a la comisaría<sup>115</sup>. Una vez ahí, el escribiente José Celada condujo a Soledad a una habitación retirada donde, en atención a lo declarado por la propia víctima, "le dijo que se acostara, levantándole las enaguas le introdujo un dedo en las partes genitales, preguntándole si sentía algún dolor a lo que le contestó que sí porque sentía dolor. Que esto lo hizo varias veces sin pasar de tres, tirándola al suelo y haciéndola andar, en cuya operación duró una hora, que luego la sacó de la pieza, mandándola después para la Diputación"<sup>116</sup>.
- 58 Tras recibir orden del juez, dos médicos examinaron los genitales de la víctima, afirmando que si bien su himen se encontraba desgarrado era difícil introducir el dedo meñique en la vagina de ésta, por lo que interpretaban que la desfloración no se había producido con el pene sino con un objeto más pequeño por lo que, a pesar de lo recogido en la normativa penal, tras interrogar detenidamente a varios guardias diurnos de la citada comisaría, y no encontrando quien aportara nueva información para esclarecer lo ocurrido, el magistrado Joaquín M. Escoto condenó a José Celada a nueve meses y dieciocho días de prisión por un delito de atentado contra el pudor<sup>117</sup>. Según lo recogido en el Código Penal de 1871, aquel que cometiera este delito contra una víctima menor de catorce años debía de ser condenado a una pena de tres años de prisión y al pago de setenta a setecientos pesos. En la emisión de fallo, por tanto, el magistrado no acató la ley y, haciendo uso de su arbitrio, dio un trato de favor al empleado policial en comparación a lo estipulado en la normativa penal<sup>118</sup>.

- 59 La última denuncia de esta naturaleza registrada en la documentación de archivo consultada fue la presentada contra el gendarme José de Jesús Acosta por la supuesta agresión perpetrada en la persona de Dolores Ortiz, una mujer casada de 33 años, que trabajaba cuidando a una religiosa de avanzada edad por las noches<sup>119</sup>. Al tener que atravesar la llamada segunda calle de Venegas para acceder a su lugar de trabajo, calle vigilada por el referido gendarme, la primera noche Dolores sufrió insultos y amenazas por parte de éste quien, al ver a una mujer caminando sola de noche, pensó que era una prostituta<sup>120</sup>. Tras exigirle que se acostara con él, el agente agarró a su víctima del pecho, trató de subirle las enaguas, se desabrochó los pantalones y la tiró al suelo. Tras una intensa discusión, Dolores logró escapar de su agresor<sup>121</sup>. A la noche siguiente, con objeto de evitar un nuevo ataque, Dolores cruzó la segunda calle de Venegas acompañada de su comadre. Al encontrarse con el gendarme José de Jesús y preguntarle éste que a dónde se dirigían, Dolores contestó con burla que "a casa de su madre", lo que provocó que fuera detenida y conducida a comisaría por faltar a la autoridad<sup>122</sup>. Una vez frente a las autoridades judiciales, la víctima relató lo ocurrido y presentó su acusación contra el gendarme Acosta, quien no fue tan siquiera reprendido por la autoridad judicial.

## Conclusión

- 60 El control de la sexualidad capitalina estuvo a lo largo del siglo XIX en manos de un heterogéneo y des-profesionalizado conjunto de cuerpos policiales, auspiciados siempre por una vigilante comunidad vecinal. Desde los albores de la Independencia y hasta el último tercio del siglo XIX, la prevención y represión de los delitos sexuales dependió de vecinos con fama de hombres honrados y diligentes que, por orden superior del ayuntamiento, del gobernador del Distrito o de la presidencia de la nación, ejercieron tareas de policía en sus respectivos cuarteles, además de desempeñar su oficio cotidiano. La normativa acatada por estos agentes, sin embargo, no siempre se correspondió con la recogida en las leyes. Desconocedores del derecho escrito, estos guardianes del vecindario solían regir sus actos con base en lo dispuesto por el auxiliar de su cuartel. La moralidad pública, por tanto, era un concepto abstracto que pendía directamente de sus valores e intereses.
- 61 Las paulatinas reformas del sistema de vigilancia que se sucedieron a lo largo del siglo XIX en la capital mexicana no lograron paliar esta falta de formación y recursos de sus integrantes, quienes siguieron privilegiados por un estatus, durante la primera mitad del siglo XIX, y por un poder coercitivo, durante la segunda mitad de la centuria.
- 62 Más allá de la veracidad de los acontecimientos narrados en los expedientes judiciales que hemos analizado, para la primera parte del periodo contemplado, estos documentos nos han permitido acercarnos tanto a la función como a la mentalidad de un conjunto de individuos (alcaldes auxiliares y subalternos) considerados "honrados", al haber sido elegidos para ejercer su cargo por su, supuestamente, ejemplar e intachable conducta. Hemos podido comprobar, además, cómo la comprobación policial de los ilícitos sexuales se solía producir en el espacio privado del hogar de estos funcionarios, donde los detenidos eran interrogados sin la presencia de abogados o testigos imparciales, disipando las fronteras entre lo público y lo privado en un momento de creciente pero compleja institucionalización y modernización estatal.

- 63 El valor probatorio que siguieron ameritando prácticamente todas las declaraciones de los agentes del orden durante la segunda mitad del siglo, por otro lado, incrementó la de por sí, notable esfera de poder que gozaban estos individuos, carentes de control y formación cívica, en su mayoría, lo que creó un clima propicio para la comisión de excesos y abusos policiales de diversa índole.
- 64 Algunos de los procesos judiciales analizados, pese a no ser cuantitativamente representativos nos han permitido apreciar ejemplos de resistencia ante los abusos protagonizados por mujeres que, lejos de adecuarse a un imperante modelo de sumisión y recato femeninos, se opusieron activamente a los excesos protagonizados por los agentes, acudiendo para ello incluso, a las instituciones desde las que, paradójicamente, se toleraba la desigualdad que, en la práctica, alimentaba la violencia sufrida.
- 65 Estos pequeños retazos de vida, reconstruidos mediante las declaraciones pronunciadas en el foro, han dado testimonio del mantenimiento en la sociedad capitalina de una valoración de los individuos en función de su extracción socioeconómica y de su género, siendo las actitudes sexuales y reproductivas aspectos fundamentales de la calificación social femenina. Lo afirmado, para aquellas mujeres que no acataran el modelo de sexualidad imperante, como hemos ejemplificado a lo largo del artículo, se tradujo, en su mayor desprotección y exposición a sufrir descalificaciones y abusos de diversa índole.
- 66 A pesar de las garantías procesales reconocidas en las leyes antes<sup>123</sup> y después de la independencia mexicana, sin embargo, pocas personas fueron conocedoras de la normativa, tanto en lo concerniente a sus obligaciones como a sus derechos. En este marco, debemos considerar que las herramientas para evitar o denunciar la comisión de abusos o delitos por parte de las autoridades policiales competentes en el ejercicio de su cargo eran instrumentos inmanejables para los sectores socioeconómicos más vulnerables. El desconocimiento de las reglas procesales, así como el miedo a contravenir los intereses de personas con mayor estatus y reconocimiento social y ético<sup>124</sup> jugaron a favor de que muchos de los excesos e infracciones perpetradas por los agentes del orden no fueran denunciados. Esta situación, unida a los continuos llamamientos a frenar abusos policiales recogidos en las leyes, nos inclina a considerar que estos excesos lamentablemente se produjeron en mayor proporción que la que consta en los registros.

## Fuentes

### Fuentes Inéditas

- 67 Archivo General de la Nación de México, ciudad de México, México, Fondo Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Cajas 26, 27, 61, 131, 189, 195, 199, 209, 278, 308, 391, 400, 474, 497, 512, 528, 601, 682.

### Fuentes Publicadas

- 68 Bentura Beleña, Eusebio, *Copias a la letra ofrecidas en el primer tomo de la recopilación sumaria de todos los autos acordados de la Real Audiencia y Sala del Crimen de esta N. E. y providencias de su superior Gobierno*, vol. 2, Don Felipe Zúñiga y Ontiveros, México, 1787, 373 p.

- 69 Colección de Leyes, Decretos y Reglamentos que interinamente forman el sistema político, administrativo y judicial del Imperio, vol. 5, Imprenta de Andrade y Escalante, México, 1865, 89 p.
- 70 Código Penal para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California, sobre delitos del fuero común y para toda la República Mexicana, sobre delitos contra la Federación, Chihuahua, Librería de Donato Miramontes, 1883 [1871]
- 71 Cumplido, Ignacio, México, "Acordada (cárcel de la)", 1 de febrero de 1841, en Orozco y Berra, Manuel (coord.), Apéndice al Diccionario Universal de Historia y Geografía. Colección de artículos relativos a la República Mexicana, Imprenta de J. M. Andrade y F. Escalante, México, 1855, pp. 41-43.
- 72 De la Pascua, Anastasio, Febrero Mejicano, o sea la Librería de Jueces, abogados y escribanos que, refundida, ordenada bajo nuevo método, adicionada con varios tratados y con el título de Febrero Novísimo dio a luz D. Eugenio de Tapia. Nuevamente adicionada con otros diversos tratados y las disposiciones del Derecho de Indias y del Patrio, por el Lic. Anastasio de la Pascua, vol. 7, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2010 [1835], 310 p.
- 73 Del Castillo Velasco, José María, Colección de bandos, disposiciones de policía y reglamentos municipales de administración del Distrito Federal, Imprenta de V. G. Torres, México, 1869, 602 p.
- 74 Dublán Manuel, y Lozano, José María, *Legislación o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la Independencia de la República*, vol. 1, Imprenta del Comercio a cargo de Dublán y Lozano, México, 1876, 845 p.
- 75 Dublán Manuel, y Lozano, José María, *Legislación o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la Independencia de la República*, Vols. 2, 5, 7 y 9, Imprenta del Comercio a cargo de Dublán y Lozano, México, 1876-1878.
- 76 Escriche, Joaquín, *Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia*. Nueva Edición corregida notablemente y aumentada con nuevos artículos, notas y adiciones sobre el derecho americano, por Don Juan B. Guim, Librería de la Rosa, Bouret y Cía, París, 1851, 1543 p.
- 77 Espinoza, Luis y Álvarez, Manuel, *Plano de la Ciudad de México*. Orozco y Berra, Manuel, Materiales para una cartografía mexicana, Sagarpa, México, 2012, 325 p. Disponible en: <http://w2.siap.sagarpa.gob.mx/mapoteca/mapas/materiales/Cap%C3%ADtulo%20VIII%20Planos%20Iconogr%C3%A1ficos.pdf> [Consultado el 3 de diciembre de 2018]
- 78 Gómez de la Cortina, José, *Boletín del Instituto Nacional de Geografía y Estadística de la República Mexicana*, Tipografía de R. Rafael, México, 1839, 325 p.
- 79 "Plano Oficial de la Ciudad de México. Levantado de orden del H. Ayuntamiento por la Comisión de Saneamiento y Desagüe en 1889 y 1890. Detallado ampliamente y publicado por la antigua y acreditada Casa C. Montauriol y Cía. Disponible en <https://www.raremaps.com/gallery/enlarge/34931> [Consultado el 1 de enero de 2018]
- 80 *Reglamento de la policía de la Ciudad de México y del Distrito Federal*, Imprenta de V. G. Torres, México, 1872, 60 p.
- 81 Rodríguez San Miguel, Juan N., *Pandectas hispano-mejicanas: o sea Código general comprensivo de las leyes generales, útiles y vivas de las Siete Partidas, Recopilación Novísima, la de Indias, Autos y Providencias conocidas por de Montemayor y Beleña, y Cédulas posteriores hasta el año de 1820*, vol. 3, Mariano Galván Rivera, México, 1840, 919 p.

- 82 Zarco, Francisco y Sierra Casasús, Catalina, *Crónica del Congreso Extraordinario Constituyente (1856-1857)*, COLMEX, México, 1957, 1009 p.

---

## BIBLIOGRAFÍA

- Arenal Fenochio, Jaime, "El discurso en torno a la ley: el agotamiento de lo privado como fuente del derecho en el México del siglo XIX", en Connaughton, Brian (Coord.), *Construcción de la legitimidad política en México en el siglo XIX*, El Colegio de Michoacán, Zamora, Michoacán, 1999, pp. 303-322.
- Baratta, Alessandro, "El paradigma del género. De la cuestión criminal a la cuestión humana", en Birgin, Haydeé (comp.), *Las trampas del poder punitivo*, Ed. Biblos, Buenos Aires, 2000, p. 39-84.
- Bourdieu, Pierre, *La dominación masculina*, Anagrama, Barcelona, 2000.
- Butler, Judith, *El género en disputa*, Paidós, Barcelona, 2001, 316 p.
- Campos Aragón, Leticia, *La electricidad en la ciudad de México y área conurbada*, Siglo XXI, México, 2005, 428 p.
- Cangas Arreola, Omar Daniel, "El amor se volvió mujer. Las mujeres y el amor en el México colonial", *Avances*, México, n° 132, 2006, pp. 1-28.
- Carmagnani, Marcello y Hernández Chávez, Alicia "La ciudadanía orgánica mexicana, 1850-1910", en Sábato, Hilda (coord.), *Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas en América Latina*, El Colegio de México/Fondo de Cultura Económica/Fideicomiso Historia de las Américas, México, 1999, pp. 371-404.
- Castillo Hernández, Diego, "La ley y el honor: jueces menores en la Ciudad de México, 1846-1850", *Signos Históricos*, México, Vol. 13, n° 26, 2011, pp. 78-109.
- Diccionario Porrúa. Historia, biografía y geografía de México*, México, Editorial Porrúa, 1971, 2465 p.
- Flores Flores, Graciela, *Orden judicial y justicia criminal (Ciudad de México, 1824-1871)*, Tesis de doctorado, México, UNAM, 2013.
- Gálvez Ruiz, María Ángeles, "La construcción del nuevo Estado y la cuestión de las mujeres en México", *Chronica Nova*, n° 38, México, 2012, pp. 125-150.
- González Oropeza, Manuel, "Policía y constitución", en Madrazo Cuéllar, Jorge (dir.), *Anuario Jurídico XV*, UNAM, México, 1988, pp. 141-168.
- Palafox Menegazzi, Alejandra, "Honor, violencia y poder patriarcal en el proceso mexicano de secularización penal", *Feminismo/s*, Alicante, 28, 2016, pp. 293-313.
- Pastor, Marialba, "El marianismo en México: una mirada a su larga duración", *Cuicuilco*, n° 48, México, 2010, pp. 257-277.
- Pérez Toledo, Sonia, "El trabajo femenino en la Ciudad de México a mediados del siglo XIX", *Signos Históricos*, n° 10, México, 2003, pp. 80-114.
- Pulido Esteva, Diego, "Policía: del buen gobierno a la seguridad, 1750-1850, *Historia Mexicana*, México, Vol. LX, n° 3, 2011, pp. 1595-1642.



Ramos Escandón, Carmen, "Trabajo e identidad femenina en México: el ejemplo del textil, tabaco y trato sexual", en Morant Isabel (dir.), *Historia de las Mujeres en España y América Latina*, Cátedra, Madrid, 2006, pp. 799-814.

Santoni, Pedro, "La policía de la ciudad de México durante el Porfiriato: los primeros años (1876-1884)", *Historia Mexicana*, n° 33, México, 1983, pp. 97-129.

Serrano Ortega, José Antonio, "Los virreyes del barrio: alcaldes auxiliares y seguridad pública, 1820-1840", en Illades, Carlos y Rodríguez Kuri, Ariel (comp.), *Instituciones y ciudad: ocho estudios históricos sobre la Ciudad de México*, Uníos, México, 2000, pp. 21-60.

Speckman Guerra, Elisa "Justicia, revolución y proceso. Instituciones judiciales en el Distrito Federal (1810-1929)", en Mayer, Alicia, (coord.), *México en tres momentos: 1810-1910-2010. Hacia la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana. Retos y perspectivas*, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, México, 2007, pp. 189-206.

Speckman Guerra, Elisa, "El jurado popular para delitos comunes: leyes, ideas y prácticas (1869-1929)", en *Historia de la Justicia en México, siglos XIX y XX*, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2005, vol. 2, pp. 743-787. Suárez, Escobar, Marcela, *Sexualidad y norma sobre lo prohibido. La Ciudad de México y las postrimerías del Virreinato*, Tesis de Doctorado en Historia, México, UNAM, 1994. Teitelbaum, Vanesa. "Sectores populares y 'delitos leves' en la ciudad de México a mediados del siglo XIX", *Historia Mexicana*, n°55, México, 2006, pp. 1221-1287. Yáñez Romero, José Arturo, *Policía Mexicana: cultura política, (in)seguridad y orden público en el gobierno del Distrito Federal, 1821-1876*, UAM, Plaza y Valdés, México, 1999, 293 p.

## ANEXOS

Anexo 1. "Cuerpos y puestos de vigilancia citados en el texto (1782-1879)".

Cuerpo	Fecha de creación	Organismo creador	Organismo gestor
Alcaldes de barrio	1782	Virrey	Sala del Crimen. Ayuntamiento
Auxiliares	1822	Soberana Junta Provisional Gubernativa del Imperio	Ayuntamiento
Celadores Públicos	1826	Soberana Junta Provisional Gubernativa del Imperio	Gobernador del Distrito
Guarda-faroles	1829	Gobernador del Distrito	Gobernador del Distrito Federal
Vigilantes Diurnos	1838	Gobierno Departamental de México	Prefectura del Distrito
Vigilantes Nocturnos	1838	Gobierno Departamental de México	Prefectura del Distrito

Cuerpo de vigilancia pública de seguridad	1846	Ayuntamiento	Ayuntamiento
Jefes de Cuartel	1847	Gobernador del Distrito Federal	Gobernador del Distrito Federal
Jefes de Manzana	1847	Gobernador del Distrito Federal	Gobernador del Distrito Federal
Cuerpo de Vigilantes de policía	1848	Gobernador del Distrito Federal. Ayuntamiento	Gobernador del Distrito Federal. Ayuntamiento
Guardia de Policía	1848	Presidente del Gobierno de México	Gobernador del Distrito Federal
Vigilantes Diurnos	1849	Presidente del Gobierno de México	Gobernador del Distrito Federal
Guardias Diurnos	1850	Gobernador del Distrito Federal	Gobernador del Distrito Federal
Superintendencia de Policía	1855	Ministerio de Gobernación	Gobernador del Distrito Federal
Cuerpo de Policía Rural	1861	Presidente de la República de México	Ministerio de Guerra
Cuerpo General de Policía	1865	Emperador de México	Prefectura de México
Cuerpo Municipal de Policía	1865	Emperador de México	Ayuntamiento de México
Policía de la Ciudad de México y del Distrito Federal	1872	Presidente de la República de México	Gobernador del Distrito Federal
Gendarmería Montada	1877	Presidente de la República de México	Gobernador del Distrito Federal
Resguardo Municipal	1878	Presidente de la República de México	Gobernador del Distrito Federal
Gendarmería Municipal	1879	Presidente de la República de México	Ayuntamiento

Fuente: Elaboración propia, a partir de las fuentes normativas citadas a lo largo del texto.

## NOTAS

1. Véase al respecto Arenal Fenochio, Jaime, “El discurso en torno a la ley: el agotamiento de lo privado como fuente del derecho en el México del siglo XIX”, Connaughton, Brian (coord.), *Construcción de la legitimidad política en México en el siglo XIX*, El Colegio de Michoacán, Zamora, Michoacán, 1999, pp. 305-308. Los comportamientos sexuales reprobados legalmente pasaron a integrar el título VI del Código Penal de 1871, dentro de la categoría de “Delitos contra el orden de las familias, la moral pública o las buenas costumbres”. Véase al respecto: Palafox Menegazzi, Alejandra, “Honor, violencia y poder patriarcal en el proceso mexicano de secularización penal”, *Feminismo/s*, Alicante, n° 28, 2016, p. 307. Para un estudio del tratamiento penal de estos ilícitos véase: Suárez, Escobar, Marcela, *Sexualidad y norma sobre lo prohibido. La Ciudad de México y las postrimerías del Virreinato*, Tesis de Doctorado en Historia, México, UNAM, 1994.
  2. Entre estas obras las más aludidas en la práctica judicial fueron: *Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia* de Joaquín Escriche, *Febrero Mejicano* de Anastasio de la Pascua y *Novísimo Sala Mexicano* de Manuel Dublán y Luis Méndez.
  3. Con “arbitrio judicial” hacemos referencia a la facultad discrecional de los juzgadores de resolver un proceso, decidiendo entre varias opciones posibles, ante la ausencia de una prescripción legal determinante.
- Otros estudios, como los de Elisa Speckman o Graciela Flores sobre el sistema de justicia penal mexicano en la época, acreditan lo afirmado en este párrafo. Véase: Speckman Guerra, Elisa “Justicia, revolución y proceso. Instituciones judiciales en el Distrito Federal (1810-1929)”, en Mayer, Alicia, (coord.), *México en tres momentos: 1810-1910-2010. Hacia la conmemoración del Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolución Mexicana. Retos y perspectivas*, ciudad de México, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, 2007, pp. 189-206; Speckman Guerra, Elisa, “El jurado popular para delitos comunes: leyes, ideas y prácticas (1869-1929), en *Historia de la Justicia en México, siglos XIX y XX*, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2005, vol. 2, pp. 743-787 y Flores Flores, Graciela, *Orden judicial y justicia criminal (Ciudad de México, 1824-1871)*, Tesis de doctorado, México, UNAM, 2013.
4. José Arturo Yáñez Romero ha desarrollado un extraordinario trabajo sobre la conceptualización del cuerpo de policía mexicano, entendido como “elemento constituyente de la cultura política” y una “parte fundamental del modo de gobierno realmente existente”. Este estudio aborda de manera teórica la implantación paulatina de un modelo de policía liberal y las continuidades con respecto al referente de policía pública colonial. Véase al respecto Yáñez Romero, José Arturo, *Policía Mexicana: cultura política, (in)seguridad y orden público en el gobierno del Distrito Federal, 1821-1876*, UAM, Plaza y Valdés, México, 1999, pp. 10, 21.
  5. Al respecto véase: Castillo Hernández, Diego, “La ley y el honor: jueces menores en la Ciudad de México, 1846-1850”, *Signos Históricos*, México, vol. 13, n° 26, 2011, p. 86. Yáñez Romero, J., *Policía Mexicana...*, Op. Cit., pp. 177, 185 y Serrano Ortega, José Antonio, “Los virreyes del barrio: alcaldes auxiliares y seguridad pública, 1820-1840”, en Illades, Carlos y Rodríguez Kuri, Ariel (comp.), *Instituciones y ciudad: ocho estudios históricos sobre la Ciudad de México*, Uníos, México, 2000, pp. 32-35.
  6. Escriche, Joaquín, *Diccionario razonado de legislación y jurisprudencia. Nueva Edición corregida notablemente y aumentada con nuevos artículos, notas y adiciones sobre el derecho americano*, por Don Juan B. Guim, Librería de la Rosa, Bouret y Cía, París, 1851, p. 1356.
  7. Pulido Esteve, Diego, “Policía: del buen gobierno a la seguridad, 1750-1850”, *Historia Mexicana*, México, vol. LX, n° 3, 2011, p. 1611.
  8. González Oropeza, Manuel, “Policía y constitución”, en Madrazo Cuéllar, Jorge (dir.), *Anuario Jurídico XV*, UNAM, México, 1988, pp. 144.

9. Serrano Ortega, J., “Los virreyes del barrio...”, Op. Cit., p. 21.

10. Considérese que sólo hasta 1850 más de treinta presidentes se sucedieron en el gobierno del país que, en 1848, además, perdió más de la mitad de su territorio con la firma con Estados Unidos del tratado de Guadalupe-Hidalgo.

11. José M. del Castillo Velasco, miembro del ayuntamiento de la ciudad de México y antiguo secretario del gobierno del Distrito Federal, recopiló en 1869 el conjunto de normativas “de policía y buen gobierno” vigentes en este territorio, dando cuenta de su cuantioso carácter a lo largo del siglo en la capital mexicana. *Del Castillo Velasco, José María, Colección de bandos, disposiciones de policía y reglamentos municipales de administración del Distrito Federal*, Imprenta de V. G. Torres, México, 1869, pp. 83, 226-228, 243, 342, 400.

12. Vecino era el varón adulto que tenía establecido su domicilio en la ciudad desde hacía mínimo diez años y tenía intención de permanecer en ella. Escribiche, J., *Diccionario razonado...*, Op. Cit., p. 1526.

13. Véase Anexo 1.

14. Expedientes pertenecientes al fondo “Tribunal Superior del Distrito Federal” (TSDF) del Archivo General de la Nación de México (AGNM). Al encontrarse en proceso de clasificación, la mayor parte de los documentos carecen de número de expediente -por lo que hemos indicado el título como elemento distintivo-. En algunos casos, carecen también de foliación.

15. En concreto, en el periodo comprendido entre 1824 y 1880 se analizaron: 270 expedientes por estupro por seducción, 111 por violación, 12 por adulterio, 75 por amancebamiento, 67 por incontinencia adulterina, 42 por incesto, 37 por estupro inmaturo, 25 por lenocinio, 23 por violación incestuosa, 12 por fornicación y 8 por bigamia.

16. Según la fuente analizada, entre enero y agosto de 1836 se sucedieron dos “ultrajes al pudor”, junto con dos “lenocinios”, frente a ciento noventa y cinco delitos de otra índole, de los cuales treinta fueron categorizados como “heridas graves” y cinco como “homicidios”. Gómez de la Cortina, José, *Boletín del Instituto Nacional de Geografía y Estadística de la República Mexicana*, Tipografía de R. Rafael, México, 1839, p. 30.

17. Según estas premisas, el crimen o la desviación delictiva son producto de determinadas construcciones, valores y reglas históricamente determinadas, por lo que entre un sistema de justicia criminal, como el que analizamos, y una sociedad concretos se establece una relación de interdependencia en la que la normativa criminal opera como elemento activo en la creación, reproducción y consolidación material e ideológica de ciertas relaciones de poder. Baratta, Alessandro, “El paradigma del género. De la cuestión criminal a la cuestión humana”, en Birgin, Haydeé (comp.), *Las trampas del poder punitivo*, Ed. Biblos, Buenos Aires, 2000, p. 42. Desde un enfoque de género, de acuerdo con la pensadora Judith Butler, interpretamos que el sistema criminal desarrollado en México a lo largo del siglo XIX produjo una serie de categorías jurídicas y sociales ligadas a los comportamientos sexuales femeninos al tiempo que trataba de legitimar estas construcciones, interpretándolas como la representación de una realidad dada. Butler, Judith, *El género en disputa*, Paidós, Barcelona, 2001, pp. 47-48.

18. Los cuerpos de orden y vigilancia de la ciudad de México sufrieron numerosas reformas, referentes a su organización interna y la creación de nuevos cargos, lo que se tradujo en la coexistencia y sucesión de distintas jerarquías y denominaciones.

19. “Reglamento de los alcaldes de barrio de la ciudad de México, por Don Baltasar Ladrón de Guevara”, México, 6 de noviembre de 1782, en Solano, Francisco de (Comp.), *Normas y leyes de la ciudad hispanoamericana. 1601-1821*, vol. 2, CSIC, Madrid, 1996, pp. 223-233. Prueba de este mantenimiento de las fronteras recogidas en el reglamento de 1782 durante la mayor parte del siglo es el *Plano de la ciudad de México*, levantado por orden del Ministerio de Fomento en el año de 1867. Espinoza, Luis y Álvarez, Manuel, *Plano de la Ciudad de México*. Orozco y Berra, Manuel, *Materiales para una cartografía mexicana*, Sagarpa, México, 2012, p. 305. Disponible en: <http://w2.siap.sagarpa.gob.mx/mapoteca/mapas/materiales/Cap%C3%ADtulo%20VIII%20Planos%20de%20la%20ciudad%20de%20M%C3%A9xico>

20Iconogr%C3%A1ficos.pdf [Consultado el 3 de diciembre de 2018] Para 1891, sin embargo, como muestra el plano oficial de la ciudad, las fronteras de esta división habían cambiado por completo. Véase el “Plano Oficial de la Ciudad de México. Levantado de orden del H. Ayuntamiento por la Comisión de Saneamiento y Desagüe en 1889 y 1890. Detallado ampliamente y publicado por la antigua y acreditada Casa C. Montauriol y Cía. Disponible en: <https://www.raremaps.com/gallery/enlarge/34931> [Consultado el 1 de enero de 2018]

20. El cargo de alcalde auxiliar fue propuesto por el ayuntamiento de la ciudad de México a la diputación provincial, en junio de 1821, en los albores de la independencia del país. Serrano Ortega, J. A., “Los virreyes del barrio...”, Op. Cit., p. 27.

21. “Reglamento para el alumbrado de México”, 29 de diciembre de 1829, art. 13, en Serrano Ortega, José Antonio, “Los virreyes del barrio...”, Op. Cit. p. 686. Este cuerpo de guarda-faroles, a pesar de los vaivenes, compaginó sus labores policiales de vigilancia nocturna con la de custodios del alumbrado de la ciudad hasta 1878 cuando fueron relevados de sus funciones de seguridad pública y entraron a formar parte de la Compañía de Encendedores. Campos Aragón, Leticia, *La electricidad en la ciudad de México y área conurbada*, Siglo XXI, México, 2005, p. 78.

22. Información obtenida gracias a los datos recogidos sobre algunos auxiliares que figuraron como testigos en los procesos analizados.

23. Un ejemplo fue el cuerpo de celadores públicos. Formado en 1826 y con una vigencia de menos de un año, este cuerpo de policía municipal estuvo integrado por “ciento cincuenta hombres de a pie y cien montados” a las órdenes de “un cabo superior y dos cabos subalternos”. Ninguno de sus miembros gozaba de fuero privilegiado, a diferencia de los miembros del ejército, y el mantenimiento de su cargo dependía del gobernador del Distrito. “Se establece en el distrito un cuerpo de policía municipal bajo el título de Celadores públicos”, 28 de mayo de 1826, en Dublán Manuel, y Lozano, José María, *Legislación o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde la Independencia de la República*, vol. 1, Imprenta del Comercio a cargo de Dublán y Lozano, México, 1876, pp.798-799.

24. A partir de la implantación del centralismo en el gobierno, en 1836, la prefectura de México - y los celadores y vigilantes que dependían de ésta- fueron incrementando sus competencias en detrimento de los auxiliares, quienes quedaron desde 1847, con el restablecimiento del gobierno federal, bajo las órdenes de los jefes de manzana. “Bando de policía preventiva y seguridad del Distrito Federal” de 11 de enero de 1847, en Dublán M., y Lozano, J. M., *Legislación o colección completa...*, Op. Cit., vol. 5, pp. 243-246.

25. Pérez Toledo, Sonia, “El trabajo Femenino en la Ciudad de México a mediados del siglo XIX”, *Signos Históricos*, nº 10, México, 2003, p. 94.

26. En concreto, el cuartel menor 2 se extendía “desde el puente de Santo Domingo, de sur a norte, por la calle de Santa Catarina Mártir, hasta el puente de Señora Santa Anna y siguiendo por su acequia, de Oriente a Poniente, hasta el puente de las Esquiveres. De aquí, de norte a sur, hasta la acequia que viene de Santo Domingo en el puente de la Misericordia: desde éste, de poniente a oriente, por el puente de Amaya, hasta el puente de Santo Domingo donde empezó”. El cuarto cuartel menor iba desde el puente de la Misericordia “yendo de Sur a Norte hasta llegar a la acequia que viene de la Parroquia de Señora Santa Anna, y puente de las Esquiveres: desde éste, torciendo de Oriente a Poniente siguiendo la misma acequia, hasta el puente de Santiaguito, donde da vuelta para la Concepción: desde aquí, continuándola de Norte a Sur, hasta la en (sic) que se une con la de Santo Domingo en el puente del Zacate: desde aquí de Poniente a Oriente, hasta el puente de la Misericordia”. Bentura Beleña, Eusebio, *Copias a la letra ofrecidas en el primer tomo de la recopilación sumaria de todos los autos acordados de la Real Audiencia y Sala del Crimen de esta N. E. y providencias de su superior Gobierno*, vol. 2, Don Felipe Zúñiga y Ontiveros, México, 1787, pp. 34-35.

27. El cuartel número 17 iba “desde la esquina opuesta a la del Cementerio de Jesús María de Poniente a Oriente, por la calle de la Machincuepa y la de Solano, hasta el puente de este nombre:

Desde él, dando una corta vuelta a la Fábrica de Norte a Sur, hasta la entrada de la plazuela de la Palma frente de la Capilla de este nombre. Desde ella de Oriente a Poniente, hasta la esquina de la calle de Cuevas. Desde ella de Sur a Norte, por las calles Quemada, de los Ciegos, de la Estampa de la Merced, pasando por frente del Templo de Jesús María, hasta la esquina donde comenzó”. El cuartel número 19 se extendía “desde el puente de Solano, de Poniente a Oriente, por la calle de Santa Cruz, hasta el Guarda de San Lázaro: Desde él, de Norte a Sur, por el Alvarradón, hasta un puente nuevo inmediato a un Rancho de Pacheco: Desde él, de Oriente a Poniente, hasta la entrada a la plazuela de la Palma, frente de la Capilla de este nombre: Desde dicha entrada, de sur a Norte, hasta el puente de Solano donde comenzó”. Bentura Beleña, E., *Copias a la letra...*, Op. Cit., pp. 38-37.

28. Los 139 expedientes judiciales contemplados en el gráfico están comprendidos entre las cajas 25 y 238. Estas cajas han sido revisadas en su totalidad pero no en todas hemos registrado expedientes relativos a delitos sexuales.

29. Serrano Ortega, J. A., “Los virreyes del barrio...”, Op. Cit., p. 22.

30. “Reglamento de auxiliares para la seguridad de las personas y bienes de los vecinos, y observancia de las leyes de policía”, 6 de febrero de 1822, art. 25, en Rodríguez San Miguel, Juan N., *Pandectas hispano-mexicanas: o sea Código general comprensivo de las leyes generales, útiles y vivas de las Siete Partidas, Recopilación Novísima, la de Indias, Autos y Providencias conocidas por de Montemayor y Beleña, y Cédulas posteriores hasta el año de 1820*, vol. 3, Mariano Galván Rivera, México, 1840, p. 678.

31. “Reglamento de auxiliares...”, art. 17, en Rodríguez San Miguel, J. N., Op. Cit., p. 678.

32. Archivo General de la Nación de México (AGNM), Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Caja (c) 195, Expediente (e) “Ignacio Cervantes y socia, incontinencia”, Foja (f) s/ f. Pese a que el derecho canónico consideraba adúlteros tanto a la mujer como al hombre casados que tuviesen relaciones sexuales con otras personas, el derecho civil tan sólo reconocía como tal a la mujer casada y a su cómplice: En consecuencia, sólo el marido agraviado podía formular una acusación de adulterio y sólo el adulterio femenino estaba penado legalmente. Escribiche, J., *Diccionario razonado...*, Op. Cit, 1851, p. 101.

33. AGNM, TSJDF, c 195, e “Hilario Molina y socia, incontinencia”, s/f. AGNM, TSJDF, c 209, e “Carmen Calapiz, incontinencia”, foliación (ff) 220r-223v.

34. Una mujer soltera era aquella que pese a no haber contraído matrimonio ya había dejado de ser virgen. En contraposición, las mujeres no casadas que siguieran siendo honradas recibían el calificativo de doncellas.

35. Por orden del gobernador del distrito, el juez menor del cuartel mayor n. 3 mandó averiguar quiénes eran las mujeres que habitaban la casa n. 1 del callejón de las cruces y los “excesos” que cometían. AGNM, TSJDF, c 308, e “En averiguación de quienes son las mujeres que habitan la casa n. 1 del callejón de las Cruces y los excesos que cometen”, ff. 1r-2 v.

36. María de los Santos fue aprehendida por el cabo de la formación reservada de policía, Felipe López, por andar “vestida de hombre”. AGNM, TSJDF, c 199, e. 57, “Santos María, vestida de hombre”, s. f.

37. AGNM, TSJDF, c 195, e “Faltas a la moral”, s. f.

38. AGNM, TSJDF, c 27, e 178, “Contra Rafael Arriaga y Merced Rico por incontinencia y portación de un puñal el primero”, ff. 1r-9v.

39. Por amancebamiento o concubinato, en la práctica judicial, se comprendía la cohabitación o el trato ilícito y habitual entre un hombre y una mujer que no estuvieran casados entre sí.

40. Esta expresión quedó recogida en el reglamento de los alcaldes de barrio de finales de época colonial. La desnudez para mediados del siglo XIX seguía estando prohibida con base en la Cédula de 13 de diciembre de 1799 dirigida al virrey de México y circulada por éste el 16 de abril de 1801. Véase, al respecto, De la Pascua, Anastasio, *Febrero Mejicano, o sea la Librería de Jueces, abogados y escribanos que, refundida, ordenada bajo nuevo método, adicionada con varios tratados y con el título de*

Febrero Novísimo dio a luz D. Eugenio de Tapia. Nuevamente adicionada con otros diversos tratados y las disposiciones del Derecho de Indias y del Patrio, por el Lic. Anastasio de la Pascua, vol. 7, Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2010 [1835], p. 101.

41. AGNM, TSJDF, c 195, e “Faltas a la moral”, s. f.

42. AGNM, TSJDF, c 195, e “Faltas a la moral”, s. f.

43. AGNM, TSJDF, c 26, e “Contra Margarito Barrios por incontinencia”, s. f.

44. AGNM, TSJDF, c 26, e “Contra Margarito Barrios por incontinencia”, s. f.

45. AGNM, TSJDF, c 26, e “Contra Margarito Barrios por incontinencia”, s/f.

46. “Reglamento de auxiliares...”, art. 17, en Rodríguez San Miguel, J. N., Op. Cit., p. 678.

47. AGNM, TSJDF, c 61, e 6, “Felix Durán y Micaela López, por incontinencia y el primero herido por un comisario del alcalde remitente por haberle hecho resistencia con un tranchete”, s. f.

48. Por “incontinencia”, dentro de la práctica judicial, se entendía la relación sexual habida fuera del ámbito matrimonial.

49. AGNM, TSJDF, c 61, e 6, “Felix Durán y Micaela López, por incontinencia y el primero herido por un comisario del alcalde remitente por haberle hecho resistencia con un tranchete”, s. f.

50. AGNM, TSJDF, c 61, e 6, “Felix Durán y Micaela López, por incontinencia y el primero herido por un comisario del alcalde remitente por haberle hecho resistencia con un tranchete”, s. f.

51. Al ser tratada como cuerpo del delito durante el proceso, el tranchete fue analizado y descrito por dos peritos herreros, los maestros José Guadalupe Domínguez y Policarpio Salcedo. Como quedó recogido en el Bando de 4 de febrero de 1831, no podían portarse armas de ningún tipo sin contar con la pertinente licencia del gobierno del Distrito. Dublán M., y Lozano, J. M., *Legislación o colección completa...*, Op. Cit., vol. 2, p.311.

52. AGNM, TSJDF, c 61, e 6, “Felix Durán y Micaela López, por incontinencia y el primero herido por un comisario del alcalde remitente por haberle hecho resistencia con un tranchete”, s. f.

53. AGNM, TSJDF, c 61, e 6, “Felix Durán y Micaela López, por incontinencia y el primero herido por un comisario del alcalde remitente por haberle hecho resistencia con un tranchete”, s. f.

54. Las continuidades con la época colonial son aquí evidentes. Al respecto, pueden consultarse: Pastor, Marialba, “El marianismo en México: una mirada a su larga duración”, *Cuicuilco*, n° 48, México, 2010, pp. 257-277; Cangas Arreola, Omar Daniel, “El amor se volvió mujer. Las mujeres y el amor en el México colonial”, *Avances*, México, n° 132, 2006, pp. 1-28 y Gálvez Ruiz, María Ángeles, “La construcción del nuevo estado y la cuestión de las mujeres en México”, *Chronica nova: Revista de historia moderna de la Universidad de Granada*, n° 38, México, 2012, p. 142.

55. Retomamos aquí el concepto desarrollado por Bourdieu en: Bourdieu, Pierre, *La dominación masculina*, Anagrama, Barcelona, 2000, p. 59.

56. La reformulación de la subordinación femenina recogida en la legislación colonial vigente durante los primeros 50 años de vida independiente dejó paso desde mediados del siglo XIX a nuevas leyes surgidas de las reformas individualistas del liberalismo mexicano, como la *Ley de Matrimonio Civil* de 1859, que reconocía explícitamente la obligación marital de proteger, alimentar y guiar a la mujer, quien, a su vez, debía obedecer, agradar, asistir, consolar y dar consejo a su cónyuge.

57. Pérez Toledo, Sonia, “El trabajo femenino...”, Op. Cit., pp. 80-114 y Ramos Escandón, Carmen, “Trabajo e identidad femenina en México: el ejemplo del textil, tabaco y trato sexual”, en Morant Isabel (dir.), *Historia de las Mujeres en España y América Latina*, Cátedra, Madrid, 2006, pp. 799-814.

58. AGNM, TSJDF, c 61, e 6, “Felix Durán y Micaela López, por incontinencia y el primero herido por un comisario del alcalde remitente por haberle hecho resistencia con un tranchete”, s. f.

59. El 16 de septiembre de 1855, una vez derrocada la dictadura del general Antonio López de Santa Anna, los liberales tomaron el poder en la ciudad de México. Tras formar una junta de representantes estatales, Juan Álvarez fue elegido presidente provisional y, ya desde estos primeros meses, comenzaron a expedirse una serie de medidas legales de corte liberal. Entre las normas de mayor relevancia pueden considerarse: la Ley Juárez de 1855, por la que fueron



suprimidos el fuero militar y eclesiástico; la Ley Lerdo, de desamortización de los bienes inmuebles en manos de corporaciones civiles y eclesiásticas y la Ley Iglesias, que abolía el cobro de obenciones parroquiales a los pobres. Éstas y otras leyes elaboradas hasta 1863, bajo los gobiernos liberales de Juan Álvarez, Ignacio Comonfort y Benito Juárez, fueron denominadas “Leyes de Reforma”.

60. Queja formulada por el Gobernador del Distrito Juan María Flores y Terán, en: “Bando. Reglamento para las fuerzas de policía”, 9 de mayo de 1848: Dublán M., y Lozano, J. M., *Legislación o colección completa...*, Op. Cit., vol. 5, p. 360.

61. Tras proyectar a futuro un “plan de policía general de seguridad” que debía observarse en toda la República, se estableció un sistema de “vigilancia pública de seguridad”, en manos de un “comisionado de vigilancia pública”, cargo concejil, honroso y de confianza pública que ostentaría una “persona de conocida honradez y energía” nombrada en cada manzana por el ayuntamiento. Sus funciones eran las de vigilar “la conducta social” de todos los residentes de la manzana, lo que incluía “averiguar su profesión, su oficio, ocupaciones habituales, el objeto de su residencia en el paraje donde vive y los motivos de la variación de su domicilio de un punto a otro de esta ciudad. Al respecto véase el *Bando de policía, sobre hoteles, mesones, etc*, 5 de septiembre de 1846, en Dublán M., y Lozano, J. M., *Legislación o colección completa...*, Op. Cit., vol. 5, p. 159.

62. Los requisitos para formar parte de esta nueva fuerza policial eran “tener honradez acreditada por medio de un fiador abonado, buena estatura y robustez”. Dublán M., y Lozano, J. M., *Legislación o colección completa...*, Op. Cit., vol. 5, pp. 360-361.

63. En esta misma línea, nacieron otros cuerpos de vigilancia dependientes del Gobierno del Distrito e integrados por personas de escasa o nula formación y precarios sueldos como la “guardia de policía” para el Distrito Federal, o el cuerpo de vigilantes diurnos de la capital. “Decreto. Se establece una fuerza que se denominará: Guardia de Policía” del 20 de julio de 1848 “Circular. Se establecen en esta capital los vigilantes diurnos”, 17 de diciembre de 1849, en Dublán M., y Lozano, J. M., *Legislación o colección completa...*, Op. Cit., vol. 5, pp. 426-427 y pp. 652-653.

64. AGNM, TSJDF, c 278, e “Toca a la causa instruida por el Juez 2º Lic. Olmedo contra Teodoro Ruiz y Julia Arias por lenocinio”, ff. 1r-30 v.

65. Se recuerda que el concepto de “soltera” hacía referencia en la época a una mujer que, pese a no haber contraído nunca matrimonio, había mantenido relaciones sexuales, perdiendo, así, su condición de doncella.

66. Citas recabadas de la expresión de agravios firmada por Teodoro Ruiz ante la Suprema Corte de Justicia. AGNM, TSJDF, c 278, e “Toca a la causa instruida por el Juez 2º Lic. Olmedo contra Teodoro Ruiz y Julia Arias por lenocinio”, f. 9r.

67. Agradecemos las sugerencias realizadas, al respecto, por los evaluadores de la revista *Historia y Justicia*.

68. Teitelbaum, Vanesa. “Sectores populares y ‘delitos leves’ en la ciudad de México a mediados del siglo XIX”, *Historia Mexicana*, n°55, México, 2006, p. 1243. Un análisis más profundo sobre el tema se encuentra en: Carmagnani, Marcello y Hernández Chávez, Alicia “La ciudadanía orgánica mexicana, 1850-1910”, en Sabato, Hilda (coord.), *Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas en América Latina*, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, Fideicomiso Historia de las Américas, México, 1999, pp. 371-404.

69. Sólo los testimonios de las mujeres fielmente casadas, o de doncellas y viudas honradas, es decir, que no tuviesen relaciones sexuales, podían considerarse verídicos. La palabra de una mujer que no cumpliera estos requisitos carecía de valor en un juicio.

70. Como ocurrió en el juicio contra Fernando Covarrubias y Mariana Ríos por estar en “ilícita amistad”. AGNM, TSJDF, c 195, e “Fernando Covarrubias y socia, incontinencia”, s. f.

71. AGNM, TSJDF, c 195, e “Carlos Villanueva por forzamiento”, s. f. La condena se realizó pesar de las extendidas dificultades para demostrar este tipo de delitos y obtener una condena por los

mismos, como recogían algunos de los principales tratados de jurisprudencia. De la Pascua, A., *Febrero Mejicano...*, Op. Cit., p. 251.

72. AGNM, TSJDF, c 189, s. t., s. f.

73. El auxiliar Pablo Carmona, por ejemplo, acudió al domicilio de Marcelino Rocha, donde detuvo a éste y dos mujeres, Carmen Valencia y Mercedes Galindo, amante del sargento José María Sari, sólo por el pedimento de dicho sargento. AGNM, TSJDF, c 195, “Mercedes Galindo. Incontinencia”, s. f.

74. AGNM, TSJDF, c 400, s/t, ff. 1r-8 v.

75. AGNM, TSJDF, c 400, s/t, ff. 1r-1 v.

76. AGNM, TSJDF, c 400, s/t, f. 3 v.

77. Según José Antonio Yáñez Romero, un cuerpo policial que mereciera el calificativo de liberal debía constituir una institución administrativa (no política) que formara parte de la fuerza pública necesaria para garantizar los derechos y libertades del ciudadano. Debía garantizar la seguridad de toda la ciudadanía, proteger la integridad física y los bienes de los habitantes. Sus integrantes no debían gozar de fuero alguno ni privilegios ya que su idiosincrasia partía del principio de igualdad ante la ley. Yáñez Romero, J. A., *Policía Mexicana...*, Op. Cit., pp. 26-27.

78. Esta ley puso fin a los privilegios jurídicos -tanto de civiles como de militares- en materia delictiva. Art. 42 de la *Ley de administración de justicia y orgánica de los tribunales de la federación* de 23 de noviembre de 1855. En Dublán M., y Lozano, J. M., *Legislación o colección completa...*, Op. Cit., vol. 7, p. 603.

79. AGNM, TSJDF, 1838, c 131, “Criminal contra Joaquín Ayala”, s. f.

80. Esta cárcel debía su nombre al emplazamiento, situado en el edificio que albergó al tribunal de la Acordada hasta su abolición en 1812. De los posibles destinos constatados en los partes policiales, la Cárcel Nacional de la ExAcordada parecía el peor que un detenido podía esperar. Emplazada en el edificio del antiguo Tribunal de la Acordada, abolido desde 1812, operó como cárcel hasta 1862, cuando los presos fueron trasladados a la recién creada Cárcel de Belem, y pasó a ser recordada como “La Chinche” debido al gran número de insectos que poblaban sus instalaciones y a las deplorables condiciones en las que se encontraba. Testimonios como el de Ignacio Cumplido describieron esta prisión como un espacio en el que sólo aquellos que dispusieran de recursos económicos podían ocupar celdas medianamente acomodadas y huir así de la hediondez y la inmundicia que caracterizaba las mazmorras de los presos comunes. “Las paredes están llenas de sangre hasta donde puede alcanzar la mano del hombre porque baja de los techos una corriente de chinches a chupar la de los desgraciados presos y ellos las estregan contra las paredes, volviendo así más asqueroso su dormitorio”, sostenía este político liberal. Dormir parecía lo más complicado dada la “aglomeración de los cuerpos y de las materias fecales”, “las picaduras de los insectos, el insomnio, los malos alimentos y la falta de suficiente ventilación”. Los nuevos ingresados debían cooperar materialmente con el alcaide y los funcionarios de la prisión entregando gran parte de los bienes que disponían. En caso de negarse, el presidente de la cárcel y sus allegados aplicaban al preso “la culebra”, “una descarga de puñadas” y “otros excesos que la decencia”, según Ignacio Cumplido, obligaba a callar. Cumplido, Ignacio, México, “Acordada (cárcel de la)”, 1 de febrero de 1841, en Orozco y Berra, Manuel (coord.), *Apéndice al Diccionario Universal de Historia y Geografía. Colección de artículos relativos a la República Mexicana*, Imprenta de J. M. Andrade y F. Escalante, México, 1855, pp. 41-43.

81. AGNM, TSJDF, 1838, c 131, “Criminal contra Joaquín Ayala”, s. f.

82. Para el ejercicio de sus funciones, el superintendente debía servirse de “agentes auxiliares”, “inspectores” y “regidores de cuartel”. Estos últimos eran vecinos nombrados por el gobernador del Distrito a propuesta del ayuntamiento de México y encargados de las funciones desempeñadas hasta el momento por los prefectos de policía. “Reglamento expedido por el Ministerio de Gobernación sobre los deberes y atribuciones del superintendente de policía de la

Municipalidad de México”, 11 de enero de 1855, art. 20, secciones III y IV, en Dublán M., y Lozano, J. M., *Legislación o colección completa...*, Op. Cit., vol. 7, pp. 384-386.

83. Zarco, Francisco y Sierra Casasús, Catalina, *Crónica del Congreso Extraordinario Constituyente (1856-1857)*, COLMEX, México, 1957, p. 263.

84. Isidoro Olvera (1815-1859) “médico, político y precursor del agrarismo”, fue un fiel defensor de los ideales liberales a mediados del siglo XIX, lo que le costó su destierro a Tulancingo en 1854 y su detención tras el golpe de Estado de Comonfort en 1858. Con el triunfo de Ayutla, fue nombrado diputado al Congreso Constituyente y durante esos años desarrolló un proyecto de ley en defensa de un reparto agrario más equitativo entre la población. “Olvera, Isidoro”, *Diccionario Porrúa. Historia, biografía y geografía de México*, México, Editorial Porrúa, 1971, p. 1515.

85. Zarco, F. y Sierra Casasús, C., *Crónica ...*, Op. Cit., p. 263.

86. *Ibíd.*, p. 263.

87. CM 1857, art. 19.

88. El Distrito Federal quedó dividido en la municipalidad de México y cinco partidos, encabezados cada uno por un prefecto nombrado por el gobernador. En concreto, quedó dividido en la municipalidad de México, el partido de Guadalupe Hidalgo, el partido de Xochimilco, el partido de Tlalpam y el partido de Tacubaya. “Decreto del gobierno. División política del Distrito Federal”, 6 de mayo de 1861, en Dublán M., y Lozano, J. M., *Legislación o colección completa...*, Op. Cit., vol. 9, p. 204. Por el decreto de 5 de marzo de 1862 quedaron establecidas diecisiete municipalidades en el Distrito Federal. “Bando del gobierno del Distrito. Sobre división política del mismo Distrito”, 5 de marzo de 1862, en Dublán M., y Lozano, J. M., *Legislación o colección completa...*, Op. Cit., vol. 9, pp. 388-389.

89. “Ley sobre la Policía General del Imperio”, 1 de noviembre de 1865, Cap. 1, art. 1 en *Colección de Leyes, Decretos y Reglamentos que interinamente forman el sistema político, administrativo y judicial del Imperio*, vol. 5, Imprenta de Andrade y Escalante, México, 1865, p. 3.

90. Cap. 2, art. 2, *Colección de Leyes...*, Op. Cit., p. 4.

91. Cap. 2, art. 3, *Colección de Leyes...*, Op. Cit., p. 4.

92. *Reglamento de la policía de la Ciudad de México y del Distrito Federal*, Imp. De V. G. Torres, México, 1872.

93. El ejercicio de la policía de la ciudad de México, además de cuidar del aseo e higiene pública, tenía como finalidad prevenir los delitos, descubrir los que se hubiesen cometido, aprehender a los criminales y proteger a las personas y las propiedades para “salvarlas tanto de los accidentes fortuitos como de los daños intencionales”. Art. 1, *Reglamento de la policía...* Op. Cit., 1872, p. 3.

94. Art. 90, *Reglamento de la policía...* Op. Cit., 1872, pp. 40-41 y CP 1871, art. 787.

95. Santoni, Pedro, “La policía de la ciudad de México durante el Porfiriato: los primeros años (1876-1884)”, *Historia Mexicana*, n° 33, México, 1983, pp. 101-102.

96. En 1877 el Distrito Federal registró los mayores niveles de criminalidad de la República. Santoni, P., “La policía de la ciudad de México”, Op. Cit., p. 99.

97. Esta corporación de policía reemplazó en sus funciones a los resguardos diurnos y nocturnos. Los resultados de esta iniciativa no cumplieron con las expectativas depositadas. Santoni, P., “La policía de la ciudad de México”, Op. Cit., pp. 102-103.

98. Desde 1877 existía también un cuerpo de Gendarmería Montada. Este cuerpo estuvo estructurado a partir de 1879 en ocho agrupaciones de cien hombres cada una, una por cada cuartel en el que estaba dividida la ciudad. Santoni, P., “La policía de la ciudad de México”, Op. Cit., p. 108.

99. AGNM, TSJDF, c 528, e “Marciana Santos López, Antonio Morales, acusados de adulterio”, s. f.

100. AGNM, TSJDF, c 497, e “Mª Soledad Robles, Clemente Alonso. Incontinencia y falta a su aprehensor”, s. f.

101. AGNM, TSJDF, c 497, e “Mª Soledad Robles, Clemente Alonso. Incontinencia y falta a su aprehensor”, s. f.

102. AGNM, TSJDF, c 497, e “M<sup>a</sup> Soledad Robles, Clemente Alonso. Incontinencia y falta a su aprehensor”, s. f.
103. AGNM, TSJDF, c 497, e “M<sup>a</sup> Soledad Robles, Clemente Alonso. Incontinencia y falta a su aprehensor”, s. f.
104. AGNM, TSJDF, c 497, e “M<sup>a</sup> Soledad Robles, Clemente Alonso. Incontinencia y falta a su aprehensor”, s. f.
105. La detención se produjo el 20 de marzo de 1870. Soledad y Clemente fueron puestos en libertad el 23 de marzo y el 4 de abril respectivamente.
106. Se trató de los casos: AGNM, TSJDF, c 391, e “Contra Miguel Ferrete y Bonifacio Peña por fuerza y violación”, ff. 1r-48v; AGNM, TSJDF, c 474, e “Contra Casimiro Hernández por estupro en la joven Cipriana Calderón”, ff. 1r-33v; AGNM, TSJDF, c 512, e “Contra Margarito Anaya por violación y fuerza”, ff. 1r-13v; AGNM, TSJDF, c 601, “Felipe Camacho. Estupro”, ff. 1r-25v y AGNM, TSJDF, c 682, e “José de Jesús Acosta por conato de violación”, ff. 1r-10 v.
107. AGNM, TSJDF, c 391, e “Contra Miguel Ferrete y Bonifacio Peña por fuerza y violación”, ff. 1r-48v. Los cuerpos de Policía Rural integraron desde 1861 la primera policía federal del país, creada por el presidente Benito Juárez en 1861. “Decreto del gobierno. Creación de cuatro cuerpos de policía rural para la seguridad de los caminos”, 6 de mayo de 1861, en Dublán M., y Lozano, J. M., *Legislación o colección completa...*, Op. Cit., vol. 9, pp. 206-207.
108. AGNM, TSJDF, c 391, e “Contra Miguel Ferrete y Bonifacio Peña por fuerza y violación”, ff. 2r-3 v.
109. AGNM, TSJDF, c 474, e “Contra Casimiro Hernández por estupro en la joven Cipriana Calderón”, ff. 1r-33 v.
110. La villa de Guadalupe Hidalgo fue una de las once municipalidades que englobaron el Distrito Federal desde su creación en 1824. Al no disponer de juez letrado, los delitos criminales que ameritaran pena corporal eran remitidos por los jueces menores a los jueces en turno de la ciudad de México.
111. AGNM, TSJDF, c 512, e “Contra Margarito Anaya por violación y fuerza”, ff. 1r-13 v.
112. Las citas han sido extraídas de la declaración ofrecida por la víctima. AGNM, TSJDF, c 512, e “Contra Margarito Anaya por violación y fuerza”, f. 2 v.
113. AGNM, TSJDF, c 512, e “Contra Margarito Anaya por violación y fuerza”, f. 4r.
114. AGNM, TSJDF, c 601, e “Felipe Camacho. Estupro”, ff. 1r-25 v.
115. AGNM, TSJDF, c 601, e “Felipe Camacho. Estupro”, f. 7 v.
116. AGNM, TSJDF, c 601, e “Felipe Camacho. Estupro”, f. 8 v.
117. AGNM, TSJDF, c 601, e “Felipe Camacho. Estupro”, ff. 4r y 20 v.
118. Arts. 789 y 790 del *Código Penal para el Distrito Federal y Territorio de la Baja California, sobre delitos del fuero común y para toda la República Mexicana, sobre delitos contra la Federación*, Chihuahua, Librería de Donato Miramontes, 1883 [1871]
119. AGNM, TSJDF, c 682, e “José de Jesús Acosta por conato de violación”, ff. 1r-10 v.
120. AGNM, TSJDF, c 682, e “José de Jesús Acosta por conato de violación”, f. 2 v.
121. AGNM, TSJDF, c 682, e “José de Jesús Acosta por conato de violación”, f. 3r.
122. AGNM, TSJDF, c 682, e “José de Jesús Acosta por conato de violación”, f. 4 v.
123. Por supuesto referimos sólo al periodo en el que estuvo vigente la Constitución de 1812 y las leyes emanadas de las Cortes liberales españolas hasta el regreso del absolutismo en 1814.
124. Recordamos que para ocupar cualquier cargo policial, en atención a lo dispuesto en los reglamentos expedidos a lo largo del siglo, había que ser reconocido como “hombre honrado” por un superior. Cuestionar este aspecto, por tanto, también ponía en duda esta valoración.

---

## RESÚMENES

El artículo analiza la labor desempeñada en la regulación penal de las sexualidades reprobadas por distintos cuerpos de policía, que coexistieron en la ciudad de México entre 1824 y 1880. Desde una perspectiva de género, que adopta premisas de la criminología crítica y a través del análisis de fuentes normativas y expedientes judiciales incoados por delitos sexuales cometidos por mujeres o sobre mujeres, se investiga cómo la actuación de estos agentes coadyuvó a mantener y consolidar un sistema de poder desigual en términos de género y étnico-sociales.

The article analyzes the work carried out in the penal regulation of sexualities reprobated by different police forces, that coexisted in Mexico City between 1824 and 1880. From a gender perspective, which adopts premises of critical criminology, and through analysis of normative sources and judicial files, initiated by sexual crimes committed by women or on women, it is investigated how the actions of these agents contributed to maintain and consolidate an unequal power system in gender and ethnic-social terms..

Cet article analyse le travail entrepris par la régulation pénale des sexualités réprochées par différents corps de police, qui coexistèrent dans la ville de Mexico entre 1824 et 1880. Dans une perspective de genre, qui adopte les prémisses de la criminologie critique et grâce à l'analyse de sources normatives et de dossiers judiciaires pour délits sexuels commis par des femmes et sur des femmes, ce travail cherche à comprendre comme ces agents ont permis le maintien et la consolidation d'un système de pouvoir inégalitaire en termes de genre et ethnico-sociaux.

## ÍNDICE

**Mots-clés:** police, délits sexuels, libéralisme, Mexico, XIXe siècle

**Keywords:** police, sexual crimes, liberalism, Mexico city, XIXth century

**Palabras claves:** policía, delitos sexuales, liberalismo, ciudad de México, siglo XIX

## AUTOR

**ALEJANDRA PALAFOX MENEGAZZI**

Doctora en Historia, Universidad de Granada (España) Académica docente-investigadora en el Instituto de Estudios Sociales y Humanísticos (IdESH), Universidad Autónoma de Chile, FONDECYT Postdoctorado 2018, n°3180184. Universidad Autónoma de Chile. La presente investigación estuvo financiada por el Programa de Formación del Profesorado Universitario (FPU) del Ministerio de Educación del Gobierno de España, entre los años 2012 y 2016. Correo electrónico: alejandra.palafox[at]uaautonoma.cl